

INE/CG749/2022

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, INSTAURADA EN CONTRA DEL PARTIDO POLÍTICO MORENA Y SU PRESUNTO PRECANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, EL C. OSVALDO SANDOVAL QUEZADA, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN EL ESTADO DE CHIAPAS, IDENTIFICADO CON LA CLAVE INE/Q-COF-UTF/163/2021/CHIS

Ciudad de México, 29 de noviembre de dos mil veintidós.

VISTO para resolver el expediente **INE/Q-COF-UTF/163/2021/CHIS**

A N T E C E D E N T E S

I. Escrito de queja. El 03 de mayo de 2021 se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización, el escrito de queja suscrito por el C. Joel Raúl Guillén Santiz, en su carácter de representante suplente del partido político Movimiento Ciudadano ante el Consejo Municipal Electoral de Comitán de Domínguez, Chiapas, en contra del partido político Morena y su precandidato a Presidente Municipal de Comitán de Domínguez, Chiapas, el C. Osvaldo Sandoval Quezada, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en la entidad federativa en cita.

Lo anterior a efectos de denunciar hechos que, a decir del quejoso, constituyen transgresiones en materia de origen y destino de los recursos en materia de fiscalización. (Fojas de la 001 a la 78)

II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito de queja.

CAPITULO PRIMERO
ANTECEDENTES

A) *“Es un hecho notorio que, a partir de agosto del año 2020, la red social denominada “Facebook” reguló la contratación de publicidad electoral, con la finalidad de reducir información engañosa, y minimizar el riesgo de intervención o injerencia electoral. La publicidad que se contrata a través de esta plataforma, permite al anunciante:*

a) Elegir el objetivo

Para elegir el objetivo publicitario adecuado, pregúntate cuál es el resultado más importante que quieres obtener con este anuncio. Puede ser ventas en tu sitio web, descargas de tu aplicación o un mayor reconocimiento de marca.

b) Elegir el público.

Aprovecha la información que tienes sobre las personas a las que quieres llegar (como la edad o dónde viven, entre otros detalles) y elige los datos demográficos, intereses y comportamientos que representan mejor a tu público

c) Elige donde publicar el anuncio

A continuación, elige donde quieres publicar el anuncio en Facebook, Instagram, Messenger, Audience Network o en todas estas plataformas. En este paso también puedes elegir publicar anuncios en determinados dispositivos móviles.

d) Define el presupuesto.

Indica tu presupuesto diario o del conjunto de anuncios, así como el periodo durante el cual quieres que se publiquen tus anuncios. Estos datos fijan unos límites que garantizan que nunca gastarás más de lo que se acomode a tus circunstancias.

e) Elige el formato

Elige tu formato de anuncio entre seis opciones muy versátiles diseñadas para funcionar a la perfección en cualquier dispositivo y con todas las velocidades de conexión. En el anuncio, puedes mostrar un solo video o una sola imagen, o elegir un formato más amplio que incluya varias imágenes.

f) Realiza el pedido

Una vez enviado, el anuncio avanza a la subasta de anuncios, lo que ayuda a que llegue a las personas correctas.

g) Administra de anuncio y mide su rendimiento

Una vez publicado el anuncio, podrás hacer un seguimiento de su rendimiento y editar la campaña en el administrador de anuncios.

Comprueba si una versión del anuncio funciona mejor que otra, o si no se entrega de forma eficaz, y realiza las modificaciones oportunas.

- B)** *En ese sentido, la plataforma “Facebook” ha creado un sitio denominado “Biblioteca de anuncios Facebook”, que se define como:*

La biblioteca de anuncios es un lugar donde puedes buscar anuncios que están en circulación en distintos productos de Facebook.

En cuanto a todos los anuncios, puedes buscar anuncios que estén activos actualmente en los productos de Facebook.

Si se trata de anuncios sobre temas importantes, elecciones o política, también puedes buscar anuncios que no estén activos (es decir, ya no están en circulación) en los distintos productos de Facebook. Hacemos de la transparencia nuestra prioridad con el fin de evitar interferir en elecciones. Por esto la biblioteca de anuncios también incluye información adicional sobre estos anuncios, como quién los financió, el rango de dinero gastado y el alcance que tuvo el anuncio en diferentes áreas demográficas. Almacenamos estos anuncios en la biblioteca durante siete años.

Puedes ver y usar la biblioteca de anuncios en <https://www.facebook.com/ads/library>.

Si eres anunciante, puedes obtener más información acerca de los anuncios sobre temas sociales, elecciones o política en nuestro servicio de ayuda para empresas.

Ten en cuenta que existen circunstancias en que se pueden quitar anuncios de la biblioteca de anuncios, por ejemplo, en caso de infracción grave de las normas comunitarias o por solicitud gubernamental.

- C)** *Con fecha 10 de enero de la presente anualidad, dio inicio el “Proceso Electoral Local Ordinario 2021”, en el Estado de Chiapas para renovar miembros del Ayuntamiento.*
- D)** *Es obligación de los partidos políticos, conforme al artículo 182, numeral 7, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, a más tardar el 15 de enero de 2021, respecto a la convocatoria de selección de las y los candidatas a miembros de Ayuntamiento y Diputados Locales.*
- E)** *En ese sentido, a más tardar un día antes del inicio de las precampañas, es decir, el 21 de enero de 2021, conforme al artículo 182, numeral 8, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, los*

aspirantes a miembros del ayuntamiento y diputados locales, debieron hacer su registro como precandidatos ante el instituto político de su elección.

- F)** *El periodo de precampañas para miembros del Ayuntamiento y Diputados Locales transcurrió del 22 al 31 de enero de 2021, plazo durante el cual las personas con calidad de precandidatos estaban facultadas para hacer actos de precampaña dirigida a los militantes del instituto político por el cual participan.*
- G)** *Culminada la etapa de precampañas, únicamente resta que el instituto político mediante el método de selección y en la fecha informada al Instituto de Elecciones y de Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, lleve a cabo la elección interna de su candidato, de entre todos los precandidatos. Sin que esto implique que, entre el plazo de conclusión de las precampañas y el día de la elección interna, puedan realizarse actos de proselitismo y/o llamado al voto.*
- H)** *El ciudadano de nombre Osvaldo Sandoval Quezada, es usuario de la red social “Facebook” desde 2014, como puede advertirse del apartado “Detalles”, por lo que puede ser localizado por las características siguientes*

Usuario: Osvaldo Sandoval

URL: <https://www.facebook.com/osvaldo.sandovalquezada>



Foto de perfil:

Sin embargo, el 06 de febrero de 2020, creó la página de Facebook “Osvaldo Sandoval”, la cual puede ser localizada por las características siguientes:

Página: Osvaldo Sandoval

URL: <https://www.facebook.com/osvasandoval21/>

Foto de perfil:



El hoy denunciado también es titular del portal <http://osvaldosandoval.com.mx/> como se advierte del apartado denominado “Información” de la página de Facebook “Osvaldo Sandoval” y a su vez da publicidad a su nombre e imagen a través de la Asociación Civil denominada OSA AC Comitán, la cual puede ser identificada por las características siguientes:

Página: OSA AC Comitán

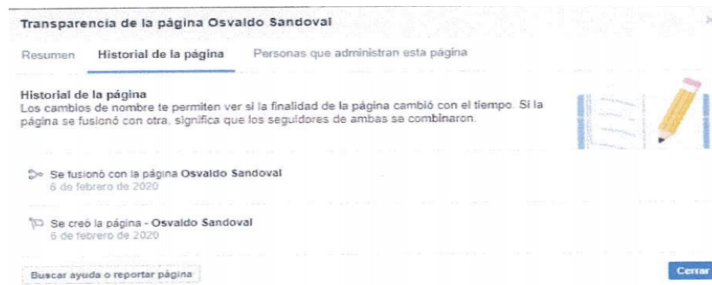
URL: <https://www.facebook.com/OSAComitan/>



Foto de perfil:

Lo anterior es así puesto que el hoy denunciado se ha ostentado como Presidente de la citada Asociación Civil, y en virtud de que tanto la página “Osvaldo Sandoval” como la página “OSA AC, Comitán” fueron creadas con el mismo número de teléfono, como se advierte del apartado “Información” de ambas, y resulta ser el número que el hoy denunciado registro ante Facebook, para la contratación de publicidad electoral.

Con corte al 16 de abril de 2021 el ciudadano Osvaldo Sandoval Quezada ha realizado 54 contrataciones de publicidad electoral, que se difunde a través de Facebook e Instagram, desde su cuenta personal y de su página, como da cuenta el apartado denominado “Transparencia de la página” en Biblioteca de Anuncios de Facebook, de la cual inserto captura de pantalla:



CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/163/2021/CHIS

Con motivo de las 54 publicaciones difundidas como publicidad electoral, el ciudadano Osvaldo Sandoval Quezada, ha erogado gastos por \$9,164.00 (nueve mil ciento sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), como se puede advertir en el apartado de “Transparencia de la página”, como se aprecia de la captura de pantalla que se inserta:

Descargos de responsabilidades usados por esta página	
Descargo de responsabilidad	Importe gastado México
Oswaldo Sandoval	\$ 7 405
▲ Estos anuncios se publicaron sin descargo de responsabilidad	\$ 1 758
Importe total gastado por la página	\$ 9 164

Para efectos del descargo de responsabilidad conforme a las políticas de publicidad electoral de “Facebook”, el hoy denunciado registró la siguiente información:

Información sobre el descargo de responsabilidad

Se ha informado de una violación de los derechos de propiedad intelectual de una de las imágenes de esta página. Hemos actuado para eliminar la imagen de esta página. Si usted es el propietario de los derechos de propiedad intelectual de esta imagen, comuníquese con nosotros para que podamos eliminarla de nuestra base de datos.

Información del anunciante

El anunciante no ha proporcionado información suficiente para el 21 de oct. 2012

Descargo de responsabilidad
Oswaldo Sandoval

Número de teléfono
+520631065113

Correo electrónico
osd@sosvaldosandoval.com.mx

Sitio web
www.sosvaldosandoval.com.mx

Dirección
Calle Flamboyant, Manzana 5 Lote 2 Colonia Magisterial, Comitán,
Comitán de Domínguez, Chiapas 30055

Ver el historial de ayuda de esta página. Ver el historial de ayuda de esta página. Ver el historial de ayuda de esta página. Ver el historial de ayuda de esta página. Ver el historial de ayuda de esta página.

Procedo a detallar las 54 publicaciones realizadas por el hoy denunciado, a través de Facebook e Instagram, de las cuales se detallan en el cuadro siguiente:

CONSEJO GENERAL INE/Q-COF-UTF/163/2021/CHIS

#	Identificador Único	Temporalidad activa	Alcance potencial (personas)	Visualizaciones	Región	Importe (pesos)	Link de recuperación
1	939957136414330	30 de septiembre al 01 de octubre de 2020	100 mil a 500 mil	1,000 a 2,000	Chiapas	\$100.00	https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=MX&id=939957136414330&view_all_page_id=102563811323201
2	1445388518993839	01 al 02 de octubre de 2020	100 mil a 500 mil	<1,000	Chiapas	<\$100.00	https://www.facebook.com/ads/library/?d=1445388518993839
3	327613205190274	02 al 18 de octubre de 2020	100 mil a 500 mil	90 mil a 100 mil	Chiapas	\$1,000 a \$1,500.00	https://www.facebook.com/ads/library/?d=327613205190274
4	352486735946848, 622916135257836, y 642894326415562	26 de septiembre al 30 de octubre, del 30 de septiembre al 02 de octubre y del 06 de octubre al 09 de octubre de 2020	>1,000,000	10 mil a 15 mil	Chiapas (78%)	\$200a \$229.00	https://www.facebook.com/ads/library/?d=642894326415562 https://www.facebook.com/ads/library/?d=622916135257836 https://www.facebook.com/ads/library/?d=352486735946848
5	407199270266828	9 al 10 de octubre 2020	50 mil - 100 mil	2 mil - 3 mil	Chiapas	<\$100	https://www.facebook.com/ads/library/?d=407199270266828
6	433979434235134	9 al 11 de octubre de 2020	50 mil - 100 mil	2 mil - 3 mil	Chiapas	<\$100	https://www.facebook.com/ads/library/?d=433979434235134
7	687846185495176	11 al 13 de octubre de 2020	50 mil - 100 mil	3 mil - 4 mil	Chiapas	<\$100	https://www.facebook.com/ads/library/?d=687846185495176
8	675834933339121	12 al 16 de octubre de 2020	50 mil - 100 mil	4 mil - 5 mil	Chiapas	<\$100	https://www.facebook.com/ads/library/?d=675834933339121
9	624427908211285	16 al 17 de octubre de 2020	10 mil - 50 mil	3 mil - 4 mil	Chiapas	<\$100	https://www.facebook.com/ads/library/?d=624427908211285
10	2815024865443005	17 de octubre de 2020	500 mil - 1 millón	<1 mil	Chiapas	<\$100	https://www.facebook.com/ads/library/?d=2815024865443005
11	269933961016772	22 al 23 de octubre de 2020	50 mil - 100 mil	3 mil - 4 mil	Chiapas	<\$100	https://www.facebook.com/ads/library/?d=269933961016772

		noviembre de 2020					1265936
25	1210645676018583	06 al 09 de noviembre de 2020	500 mil - 1 millón	5 mil - 6 mil	Chiapas	\$100 a \$199	https://www.facebook.com/ads/library/?d=1210645676018583
26	364090054699991	08 al 11 de noviembre de 2020	10 mil - 50 mil	4 mil - 5 mil	Chiapas	\$100 a \$199	https://www.facebook.com/ads/library/?d=364090054699991
27	865014317640619	09 al 12 de noviembre de 2020	50 mil - 100 mil	2 mil - 3 mil	Chiapas	\$100 a \$199	https://www.facebook.com/ads/library/?d=865014317640619
28	657324358261518	09 al 17 de noviembre de 2020	100 mil - 500 mil	25 mil - 30 mil	Chiapas (99%)	\$600 a \$699	https://www.facebook.com/ads/library/?d=657324358261518
29	366446027770275	14 al 17 de noviembre de 2020	50 mil - 100 mil	4 mil - 5 mil	Chiapas	<\$100	https://www.facebook.com/ads/library/?d=366446027770275
30	435906007800400	16 al 18 de noviembre de 2020	50 mil - 100 mil	3 mil - 4 mil	Chiapas	<\$100	https://www.facebook.com/ads/library/?d=435906007800400
31	466006504365551	16 al 30 de noviembre de 2020	100 mil - 500 mil	60 mil - 70 mil	Chiapas (99%)	\$1,000a \$1,500	https://www.facebook.com/ads/library/?d=466006504365551
32	2739222806406061	21 al 23 de noviembre de 2020	50 mil - 100 mil	4 mil - 5 mil	Chiapas	\$100 a \$199	https://www.facebook.com/ads/library/?d=2739222806406061
33	822187351955443	24 al 27 de noviembre de 2020	10 mil - 50 mil	5 mil - 6 mil	Chiapas	\$100 a \$199	https://www.facebook.com/ads/library/?d=822187351955443
34	823359595171976	29 de noviembre al 08 de diciembre de 2020	100 mil - 500 mil	40 mil - 45 mil	Chiapas (99%)	\$800a \$899	https://www.facebook.com/ads/library/?d=823359595171976

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/163/2021/CHIS

35	1079809252459068	29 de noviembre al 02 de diciembre de 2020	50 mil - 100 mil	3 mil - 4 mil	Chiapas	<\$100	https://www.facebook.com/ads/library/?id=1079809252459068
36	159187859258397	01 al 04 de diciembre de 2020	50 mil - 100 mil	3 mil - 4 mil	Chiapas	<\$100	https://www.facebook.com/ads/library/?id=159187859258397
37	137294471489146 y 2716116305268355	17 al 21 de noviembre de 2020 y 10 al 13 de diciembre de 2020	50 mil - 100 mil	7 mil - 8 mil	Chiapas	\$200 a \$299	https://www.facebook.com/ads/library/?id=137294471489146 https://www.facebook.com/ads/library/?id=2716116305268355
38	776671422912004	11 al 13 de diciembre de 2020	500 mil - 1 millón	2 mil - 3 mil	Chiapas	<\$100	https://www.facebook.com/ads/library/?id=776671422912004
39	862811554536529	12 al 18 de diciembre de 2020	100 mil - 500 mil	20 mil - 25 mil	Chiapas (99%)	\$500a \$599	https://www.facebook.com/ads/library/?id=862811554536529
40	396159718161067	26 al 17 de diciembre de 2020	50 mil - 100 mil	2 mil - 3 mil	Chiapas	\$100 a \$199	https://www.facebook.com/ads/library/?id=396159718161067 Nota. Contiene video
41	1709622989242281	29 de diciembre de 2020 al 01 de enero de 2021	50 mil - 100 mil	10 mil - 15 mil	Chiapas	\$300 a \$399	https://www.facebook.com/ads/library/?id=1709622989242281 Nota. Contiene video
42	707927363256167	31 de diciembre de 2020 al 03 de enero de 2021	50 mil - 100 mil	10 mil - 15 mil	Chiapas	\$100 a \$199	https://www.facebook.com/ads/library/?id=707927363256167
43	2761957314065255	26 al 27 de enero de 2021	50 mil - 100 mil	4 mil - 5 mil	Chiapas	<\$100	https://www.facebook.com/ads/library/?id=2761957314065255
44	273964967583876	26 al 28 de enero de 2021	100 mil - 500 mil	10 mil - 15 mil	Chiapas	\$200a \$299	https://www.facebook.com/ads/library/?id=273964967583876
45	472668230394642 y 977985082611771	16 al 19 de noviembre de 2020 y 26 al 28 de enero de 2021	50 mil - 100 mil	6 mil - 7 mil	Chiapas	\$100 a \$199	https://www.facebook.com/ads/library/?id=472668230394642 https://www.facebook.com/ads/library/?id=977985082611771
46	122266103027434	de enero de 2021 26 al 27 de enero de 2021	50 mil - 100 mil	2 mil - 3 mil	Chiapas	<\$100	https://www.facebook.com/ads/library/?id=122266103027434
47	1081570985692642 y 192151849200273	21 al 23 de noviembre de 2020 y 06 al 10 de febrero de 2021	100 mil - 500 mil personas	15 mil - 20 mil	Chiapas	\$200a \$299	https://www.facebook.com/ads/library/?id=1081570985692642 https://www.facebook.com/ads/library/?id=192151849200273
48	3672537359462235	11 a 12 de febrero de 2021	50 mil - 100 mil	3 mil - 4 mil	Chiapas	<\$100	https://www.facebook.com/ads/library/?id=3672537359462235 Nota. Contiene video

I) Desde el mes de septiembre del año 2020, el hoy denunciado ha sentado las bases para su precandidatura, y estando dentro del proceso electoral, ha continuado erogando gastos, como se puede acreditar con los anuncios que cuentan con los identificadores únicos:

- a. 2761957314065255
- b. 273964967583876
- c. 472668230394642
- d. 122266103027434
- e. 1081570985692642
- f. 3672537359462235

J) Del 11 al 12 de febrero de 2021, el hoy denunciado publicó un video, para el cual contrató publicidad a través de Facebook, el cual puede ser ubicado con identificador 3672537359462235, en el video se aprecia su nombre, voz e imagen, mediante el cual solicita el voto de la militancia del partido Morena, y de la ciudadanía en general, para Presidente Municipal de Comitán de Domínguez, Chiapas en el Proceso Local Ordinario 2021, procedo a insertar transcripción del audio y video:

Amigas y amigos de Comitán, soy Osvaldo Sandoval Quezada, orgullosamente nacido y crecido en esta bella ciudad de Comitán de Domínguez, con principios y valores, que me inculcaron mi señor padre y mi señora madre, hoy me dirijo a toda la sociedad comiteca, para informarles que en días pasados, estando en tiempo y forma, me registré como aspirante a candidato a la presidencia municipal de Comitán, ya que coincido con los ideales de nuestro señor presidente de la república de ver transformado a México, hoy invito a toda la ciudadanía, a los miembros fundadores de morena, así como a mis amigos líderes de diferentes barrios, comunidades y ejidos, que me den la oportunidad, la confianza de servirles y que juntos luchemos por estos más de dos años que el presidente de la república ha trabajado para consolidar la cuarta transformación del país, estoy seguro que juntos seguiremos haciendo historia. ¡Muchas gracias!

*Por las consideraciones expuestas, se hace evidente que el ciudadano **OSVALDO SANDOVAL QUEZADA** con si actuar a través de Facebook e Instagram, violó lo dispuesto por los artículos 182, numeral 7 y 8, 183, numeral 1, fracción V, numeral 2 y 3 del Código de Elecciones y de Participación Ciudadana del estado de Chiapas, en consecuencia, tanto el partido político Morena con acreditación local, como el ciudadano **OSVALDO SANDOVAL QUEZADA** cometieron la infracción prevista en el artículo 270, numeral 1, fracción I, II, VIII, y 272, numeral 1, fracción I, IV del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del estado de Chiapas, respectivamente, al realizar actos anticipados de campaña, y no presentar su informe de gastos de precampaña en tiempo y forma, ante esta autoridad fiscalizadora.”*

CAPITULO SEGUNDO **PRUEBAS**

- 1. Documental Pública.** - Consistente en copia simple de la credencial para votar de la suscrita.
- 2. Documental Pública.** - Consistente en nombramiento expedido a favor del suscrito.
- 3. Documental Pública.** – Consistente en reporte de la Biblioteca de Anuncios de Facebook, de fecha 13 de febrero de 2021, que contiene todos los anuncios realizados por el hoy denunciado, constante de 9 fojas útiles por un solo lado, prueba que relaciono con todos los puntos del capítulo primero del presente libelo.
- 4. Documental Privada.** – Consistente en 51 reportes de fechas 13 y 15 de febrero de 2021, obtenidos de la Biblioteca de Anuncios de Facebook, con las cuales se acredita la contratación de publicidad, alcance potencial, visualizaciones, periodo de difusión, espacio demográfico en que tuvieron

lugar las visualizaciones, y el costo de cada publicación, prueba que relaciono con todos los puntos del capítulo primero del presente libelo.

- 5. Técnica.** – Archivo de audio y video, recuperado de la biblioteca de anuncios de Facebook, en el link https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=MX&id=3672537359462235&view_all_page_id=102563811323201 con el identificador 3672537359462235, prueba que relaciono con todos los puntos del capítulo primero del presente libelo.
- 6. Inspección ocular.** – Con fundamento en el artículo 19 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral solicito se practique inspección ocular a la Biblioteca de Anuncios de Facebook y a los perfiles de Facebook <https://www.facebook.com/osvaldo.sandovalquezada> , <https://www.facebook.com/osvasandooval21/> , https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=MX&view_all_page_id=102563811323201&search_type=page , <http://osvaldosandoval.com.mx/> y <https://www.facebook.com/OSAComitant/> así como de los links descritos en el cuadro inserto de fojas 7 a 12 del presente libelo, prueba que relaciono con los hechos denunciados, con los cuales se podrá acreditar que el ciudadano denunciado erogó gastos en la etapa de precampañas y omitió presentar su informe ante esta autoridad fiscalizadora.
- 7. Presuncional.** - Consistente en todos los razonamientos y valoraciones de carácter deductivo o inductivo por los cuales ésta autoridad llegue al conocimiento de hechos primeramente desconocidos a partir de la existencia de un hecho conocido; en su doble aspecto: **Legal**, siendo las establecidas expresamente por la ley; **Humanas**, las que no se encuentran previstas legalmente y surjan cuando de un hecho debidamente probado se infiere otro que es consecuencia ordinaria de aquel, prueba que relaciono con todos y cada uno de los puntos del presente libelo.
- 8. Instrumental de actuaciones.** - Consistente en todos los medios de convicción que se obtengan al analizar el conjunto de las constancias que obran en el expediente que se forme a razón de la presente demanda, prueba que relaciono con todos y cada uno de los puntos del presente libelo.”

III. Acuerdo de Admisión del escrito de queja. El 26 de abril de 2021, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por admitido el escrito de queja, asignarse el número de expediente **INE/Q-COF-UTF/163/2021/CHIS**, notificar al Secretario del

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/163/2021/CHIS

Consejo General y a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización el inicio del presente procedimiento, publicar el acuerdo y cédula de conocimiento respectiva en los estrados de este Instituto y emplazar a los sujetos incoados (Foja 79 del expediente).

IV. Publicación en estrados de los acuerdos respecto del procedimiento de queja INE/Q-COF-UTF/163/2021/CHIS.

a) El 27 de abril de 2021, se fijó en los estrados del Instituto, durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento (Foja 81 del expediente).

b) El 30 de abril de 2021, se retiraron del lugar que ocupan en el Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de inicio, la cédula de conocimientos, y mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente (Foja 82 del expediente).

V. Notificación de la admisión del escrito de queja al Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral.

El 02 de agosto de 2021, mediante oficio INE/UTF/DRN/38938/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 82 bis a la 82 ter del expediente).

VI. Notificación de la admisión del escrito de queja a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.

El 02 de agosto de 2021, mediante oficio INE/UTF/DRN/38937/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 83 bis a la 83 ter del expediente).

VII. Notificación de inicio y emplazamiento a los sujetos incoados.

Al Partido Morena, por conducto de su representante ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

a) El 07 de mayo de 2021, mediante el oficio INE/UTF/DRN/19341/2021, se notificó el emplazamiento al Representante Propietario del Partido Morena¹ ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole traslado en medio electrónico de las constancias que integraban el expediente (Fojas de la 88 a la 103)

b) El 9 de mayo de 2021, el partido incoado, dio contestación al emplazamiento; mismo que, en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala al personal autorizado por el instituto político para actuar en su representación ante esta autoridad. (Fojas de la 104 a la 106)

c) El 13 de mayo de 2021, el partido incoado, dio contestación al emplazamiento; mismo que, en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala: (Fojas de la 107 a la 114 del expediente)

“ ...

*En razón a la imputación que obra en el expediente citado al rubro, y ante una posible infracción a la normatividad electoral, en materia de origen, destino y aplicación de los recursos, así como a la omisión de entregar informes de precampaña de sus candidatos, por lo que hace al partido político Morena, se **Niega la omisión que se pretende imputar al partido político**, en el proceso del marco electoral 2020-2021, toda vez que nuestro actuar ha sido basado en el respeto estricto a la legalidad y transparencia en razón al origen y destino del financiamiento público, aunado al cumplimiento estricto del proceso electoral.*

Ahora bien, respecto a la imputación que obra en el expediente citado al rubro, es de precisar que el Partido Político Morena, no realizó registro de precandidatos ante el Registro Nacional de Precandidatos y Candidatos, ni ejerció gastos concernientes a la etapa de precampaña, hecho que fue notificado en tiempo y forma a la Unidad Técnica de Fiscalización, por lo que en ningún momento el partido político Morena, puede reconocer gastos de precampaña de algún ciudadano, el cual no fue reconocido legalmente como precandidato.

Para generar un correcto análisis de lo manifestado, es necesario citar algunas disposiciones normativas que a continuación se citan:

¹ En adelante, Morena.

Artículo 227. Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

1. (...)
2. (...)
3. (...)
4. **Precandidato es el ciudadano que pretende ser postulado por un partido político como candidato a cargo de elección popular, conforme a esta ley y a los estatutos de un partido político, en el proceso de selección interna de candidatos a cargo de elección popular.**

De lo anterior, podemos determinar que la relación entre un ciudadano que aspira a un cargo de elección popular y un partido político, necesariamente es el reconocimiento que se haga a su persona como precandidato tanto del partido político y la autoridad electoral.

La Ley General de Partidos Políticos establece lo siguiente:

Artículo 79.

1. **Los partidos políticos deberán presentar informes de campaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes:**

a) Informes de precampaña:

- I. **Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como los gastos realizados;**
- II. **Los candidatos y precandidatos son responsables solidarios del cumplimiento de los informes de campaña y precampaña. Para tales efectos, se analizará de manera separada las infracciones en que incurran;**
- III. **Los informes deberán presentarse a más tardar dentro de los diez días siguientes al de la conclusión de las precampañas;**
- IV. **Los gastos de organización de los procesos internos para la selección de precandidatos que realicen los partidos políticos serán reportados en el informe anual que corresponda, y**
- V. **Toda propaganda que sea colocada en el periodo en que se lleven a cabo las precampañas y que permanezcan en la vía pública una vez concluido dicho proceso o, en su caso, una vez que el partido postule a sus candidatos, especialmente los que contengan la imagen, nombre,**

apellidos, apelativo o sobrenombre del precandidato triunfador de la contienda interna, serán considerados para efectos de los gastos de campaña de éste, los cuales deberán ser reportados en los informes correspondientes.

Como se puede advertir, cada partido político debe presentar su informe de precampaña para cada uno de los precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña, por lo que para generar la obligación del partido político Morena a presentar el informe de precampaña, los precandidatos deben pertenecer al mismo partido.

Asimismo, por propaganda de precampaña debe entenderse el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones y proyecciones y expresiones que los precandidatos realizan con el propósito de dar a conocer sus propuestas.

Artículo 227. Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

1. (...)
2. (...)
3. ***Se entiende por propaganda de precampaña el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el periodo establecido por esta ley y el que señale la convocatoria respectiva difunden los precandidatos a candidaturas a cargo de elección popular con el propósito de dar a conocer sus propuestas. La propaganda de precampaña, deberá señalar de manera expresa, por medios gráficos y auditivos, la calidad de precandidato de quien es promovido.***

Nuevamente se desprende que la propaganda debe pertenecer al precandidato, lógicamente, del partido que lo reconoce como tal y del cual efectuó su registro ante las autoridades del INE.

Una vez referida la disposición normativa, y bajo el mismo orden de ideas, cabe aclarar que el ciudadano Osvaldo Sandoval Quezada, del cual erróneamente se hace referencia pertenece al partido político Morena, realmente es militante del partido Político Nueva Alianza, y actualmente se encuentra como aspirante a un cargo de elección popular como es la Presidencia Municipal de Comitán de Domínguez, Chiapas.

Por lo anterior, es procedente le determinar un sobreseimiento de la presente queja, toda vez que como ha sido argumentado, el actor político C. Osvaldo Sandoval Quezada, quien se ostenta actualmente como candidato del partido político Nueva Alianza, a un cargo de elección popular como es la Presidencia

Municipal de Comitán de Domínguez, Chiapas, pertenece a un partido político diverso al denunciado en el presente libelo, tal y como lo indica el Acuerdo IEPC.CG-A.161.2021, Anexo 1.3 en su página 78.

De acuerdo a lo expuesto, solicitamos no se vulnere la esfera jurídica del partido político al cual represento y en todo momento se tutele el principio relativo a la presunción de inocencia, ya que todo lo sustanciado en este proceso por su propia naturaleza no da indicio de participación indebida por parte de este partido político.

*En ese tenor, debido a que **no existe un nexo de causalidad, debe en todo momento prevalecer LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.** Se ajusta la siguiente Jurisprudencia:*

Jurisprudencia 21/2013

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES. – El artículo 20, apartado B, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrada en el derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en términos del artículo 133 de la Constitución federal, como derecho fundamental, que implica la posibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento administrativo electoral sancionados, consecuencias previstas para una infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una adecuada tutela de derechos fundamentales, entre ellos la libertad, la dignidad humana y el debido proceso. En atención a los fines que persigue el derecho sancionador electoral, consistentes en establecer un sistema punitivo para inhibir conductas que vulneren los principios rectores en la materia, como la legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad, es incuestionable que el derecho constitucional de presunción de inocencia ha de orientar su instrumentación, en la medida que los procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden concluir con la imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos de los gobernados.

*Por último, no se debe dejar de observar **El principio onus probando** que señala que la prueba incumbe al actor. En materia procesal este principio establece que cuando el estado imputa un resultado de lesión al bien jurídico, deberá probarlo y*

*no presumirlo; y el actor en sus pretensiones que obran en el expediente, afirma que existe una lesión al bien jurídico establecido en la normatividad electoral, sin embargo, **no son los hechos, sino las afirmaciones** que de los mismos hacen las partes las que deben probarse, es decir, la operación esencial es la verificación de las afirmaciones de los litigantes.”*

d) El uno de junio de dos mil veintidós se emplazó al partido Morena mediante oficio INE/UTF/DRN/13334/2022, con el fin de respetar su garantía de audiencia. (Fojas de la 234 a la 243)

e) El siete de junio de dos mil veintidós el partido Morena dio respuesta, se transcribe la parte conducente:

“(…)

Contestación de Hechos

PRIMERO. El veintiuno de abril de 2021 se recibe en la Junta local Ejecutiva de Chiapas, escrito de queja suscrito por el C. Joel Raúl Guillen Santiz en su calidad de Representante Suplente del Partido político Movimiento Ciudadano ante el consejo municipal en el estado de Chiapas (sic) en contra del partido político **morena** y del C. Osvaldo Sandoval Quezada, denunciando hechos que podrían constituir una violación a la normatividad electoral consistentes en actos de precampaña comprendidos entre el 22 al 31 de enero de 2021, que podrían derivar en una posible omisión de entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña.

SEGUNDO. El veintiséis de abril de 2021 se acordó la admisión e integración del expediente respectivo bajo el número de expediente **INE/Q-COF-UTF-163/2021/CHIS**, por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización.

TERCERO. El día siete de mayo de 2021 se emplaza al partido político Morena a través de su representación ante el Consejo General del Instituto para que, en un plazo improrrogable de **cinco días naturales**, manifieste por escrito lo que a su derecho convenga.

En relación con lo anterior y con fecha de 01 de junio de 2022 se recibe emplazamiento al partido político **morena** con el oficio Núm. **INE/UTF/DRN13334/2022**. En donde se le notifica que hay un procedimiento administrativo sancionador de queja identificado con la clave alfanumérica **INE/Q-COF-UTF/163/2021/CHIS**, y en donde se le solicita al partido político que conteste por escrito lo que considere pertinente.

De acuerdo con lo mencionado, se manifiesta lo siguiente:

*En razón a la imputación que obra en el expediente citado al rubro, y ante una posible infracción a la normatividad electoral, en materia de origen, destino y aplicación de ellos recursos, así como a la omisión de entregar informes de precampaña de sus candidatos en el marco del proceso electoral 2020-2021, por lo que hace al partido político **morena**, se **niega la omisión que se pretende imputar al partido político**, toda vez que nuestro actuar ha sido basada en el respeto escrito a la legalidad y transparencia en razón al origen y destino del financiamiento público, aunado al cumplimiento estricto del proceso electoral.*

*Ahora bien, respecto a la imputación que obra en el expediente citado al rubro, es de precisar que el Partido Político **morena**, no realizó registro de precandidatos ante el Registro Nacional de Precandidatos y Candidatos, y en consecuencia no ejerció gastos concernientes a la etapa de precampaña, hecho que fue notificado en tiempo y forma a la Unidad Técnica de Fiscalización por lo que en ningún momento el partido político **morena**, puede reconocer gastos de precampaña de algún ciudadano, el cual no fue reconocido legalmente como precandidato.*

Para generar un correcto análisis de lo manifestado, es necesario citar algunas disposiciones normativas que a continuación se citan:

“Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Artículo 227

1(...)

2(...)

3(...)

4. Precandidato es el ciudadano que pretende ser postulado por un partido político como candidato a cargo de elección popular, conforme a esta Ley y a los Estatutos de un partido político, en el proceso de selección interna de candidatos a cargos de elección popular.

De lo anterior, podemos determinar que la relación entre un ciudadano que aspira a un cargo de elección popular y un partido político necesariamente es el reconocimiento que se haga a su persona como precandidato tanto del partido político y la autoridad electoral.

La Ley general de Partidos Políticos establece lo siguiente:

“Artículo 79.

1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes:

a) Informes de precampaña:

I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como los gastos realizados;

II. Los candidatos y precandidatos son responsables solidarios del cumplimiento de los informes de campaña y precampaña. Para tales efectos, se analizará de manera separada las infracciones en que incurran;

III. Los informes deberán presentarse a más tardar dentro de los diez días siguientes al de la conclusión de las precampañas;

IV. Los gastos de organización de los procesos internos para la selección de precandidatos que realicen los partidos políticos serán reportados en el informe anual que corresponda, y

V. Toda propaganda que sea colocada en el periodo en que se lleven a cabo las precampañas y que permanezcan en la vía pública una vez concluido dicho proceso o, en su caso, una vez que el partido postule a sus candidatos, especialmente los que contengan la imagen, nombre, apellidos, apelativo o sobrenombre del precandidato triunfador de la contienda interna, serán considerados para efectos de los gastos de campaña de éste, los cuales deberán ser reportados en los informes correspondientes.

*Como se puede advertir, cada partido político debe presentar su informe de precampaña para cada uno de los precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña, por lo que, para generar la obligación del partido político **morena**, a presentar el informe de precampaña, los precandidatos deben pertenecer al mismo partido. De tal manera que, de acuerdo al acuse presentado por el Instituto Nacional Electoral con fecha 22 de enero de 2021, se manifiesta que el partido político **morena** no realizó precampaña para la renovación de miembros del Ayuntamiento en el*

20

proceso por su propia naturaleza no da inicio de participación indebida por parte de este partido político.

(...)

(...)

*Por último, no se debe dejar observar **El principio onus probando** que señala que la prueba incumbe al actor. En materia procesal este principio establece que cuando el Estado imputa un resultado de lesión al bien jurídico, deberá probarlo y no presumirlo; y el actor en sus pretensiones que obran en el expediente, afirma que existe una lesión al bien jurídico establecido en la normatividad electoral, sin embargo, **no son los hechos, si no las afirmaciones** que de los mismos hacen las partes, las que deben probarse, es decir, la operación esencial es la verificación de las afirmaciones litigantes.*

(...)"

Notificación de inicio y emplazamiento al C. Osvaldo Sandoval Quezada, otrora precandidato al cargo de Presidente Municipal de Comitán de Domínguez, Chiapas.

a) El 6 de mayo de 2021, mediante el oficio INE/UTF/DRN/19341/2021, se notificó el inicio de procedimiento y emplazó al precandidato incoado, mediante el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), corriéndole traslado en medio electrónico de las constancias que integraban el expediente (Fojas de la 88 a la 103 del expediente).

b) Cabe mencionar que a la fecha de la elaboración de la presente resolución el sujeto obligado no ha dado contestación a la autoridad.

c) El 13 de diciembre de 2021, mediante el oficio INE/UTF/DRN/47223/2021, se notificó el inicio de procedimiento y emplazó al precandidato incoado; sin embargo, este no fue localizado en su domicilio, por lo cual, esta autoridad realizó la notificación por estrados. (Fojas 163 a la 169 del expediente).

El ocho de diciembre de dos mil veintiuno, la Junta Local Ejecutiva del estado de Chiapas, mediante oficio identificado con la clave alfanumérica INE/08JDE/VS/729/2021 realizó lo conducente a efecto de notificar por estrados al interesado. (Fojas 187 a la 197 del expediente)

d) Cabe mencionar que a la fecha de la elaboración de la presente resolución el sujeto obligado no ha dado respuesta a la autoridad.

VIII. Solicitud de información al partido Nueva Alianza.

a) El 04 de noviembre de 2021, mediante oficio INE/UTF/DRN/44122/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización a fin de allegarse de los elementos necesarios con el objeto de proveer lo conducente, solicitó información al partido Nueva Alianza con relación al C. Osvaldo Sandoval Quezada. (Fojas de la 160 a la 162 del expediente)

b) Cabe mencionar que, a la fecha de la elaboración de la presente Resolución, el sujeto obligado no ha dado respuesta al respecto.

IX. Ampliación de plazo. Mediante acuerdo de fecha 23 de julio de 2021, en virtud de encontrarse diligencias pendientes de realizar para allegarse de los elementos que esclarecieran el fondo del asunto, se realizó la ampliación del plazo que otorgan los ordenamientos legales en materia electoral para presentar el proyecto de resolución del procedimiento citado al rubro. (Foja 139 del expediente).

a) El 02 de agosto de 2021, mediante oficio INE/UTF/DRN/38938/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la ampliación del plazo de procedimiento de mérito. (Fojas 140 a la 142 del expediente).

b) El 02 de agosto de 2021, mediante oficio INE/UTF/DRN/38937/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización, la ampliación del plazo de procedimiento de mérito. (Fojas 143 a la 145 del expediente)

X. Remisión de constancias para atención y conocimiento del Instituto de Elecciones y de Participación Ciudadana del estado de Chiapas.

a) El 06 de mayo de 2021, mediante oficio INE/UTF/DRN/18524/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización remitió las constancias del escrito de queja para conocimiento y atención del Instituto de Elecciones y de Participación Ciudadana del estado de Chiapas. (Fojas de la 84 a la 87 del expediente).

XI. Requerimiento de Información y documentación a la empresa Meta Platforms, Inc.

a) El once de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/20644/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el requerimiento de información en relación con el procedimiento de mérito. (Fojas 115 a la 118 del expediente)

b) El veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, a través de correo electrónico, la empresa mencionada dio respuesta al requerimiento de información señalando las especificaciones del uso de las URL'S solicitadas. (Fojas 119 a la 124 del expediente)

c) Mediante oficio INE/UTF/DRN/16040/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el requerimiento de información en relación con el procedimiento de mérito, para que proporcionara el costo de un video pautado.

d) El uno de agosto de dos mil veintidós, a través de correo electrónico la empresa mencionada dio respuesta al requerimiento de información señalando el costo por el video pautado.

XII. Solicitud de información a la Coordinación Nacional de Comunicación Social del Instituto Nacional Electoral.

a) El trece de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/21079/2021, se solicitó a la Coordinación Nacional de Comunicación Social, su apoyo para que informara lo relacionado con el monitoreo de encuestas y propaganda publicada en medios electrónicos en la cual se advierta un posicionamiento del C. Osvaldo Sandoval Quezada. (Fojas 125 a la 127 del expediente)

b) El dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, se recibió el oficio INE/CNCS-DCyAI/109/2021, relativo a la atención de la solicitud de información. Señalando que dicha Coordinación solamente realiza monitoreo de propaganda y encuestas en medios impresos, los cuales son remitidos como testigos a la Unidad Técnica de Fiscalización para su actualización en el Sistema Integral de Medios Impresos. (Fojas 128 a la 131 del expediente)

XIII. Solicitud de información a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral.

a) El veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/44123/2021, se solicitó a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, su apoyo para que informara el domicilio registrado en sus archivos del C. Osvaldo Sandoval Quezada. (Fojas 150 a la 152 del expediente)

b) El veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, se recibió la información solicitada señalando el domicilio vigente del C. Osvaldo Sandoval Quezada encontrado en las

bases del Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores. (Foja 153 del expediente)

XIV. Solicitud de certificación a la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.

a) El dieciséis y diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficios INE/UTF/DRN/49003/2021 y INE/UTF/DRN/49004/2021, se solicitó a la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, en función de Oficialía Electoral, la certificación de la existencia de los links en la red social denominada Facebook, el contenido de los mismos, así como la metodología aplicada. (Fojas 171 a la 180 del expediente)

b) El seis de enero de dos mil veintiuno, se recibió el oficio número INE/DS/11/2021, mediante el cual se informa el acuerdo de admisión del expediente de oficialía electoral INE/DS/OE/1/2021, correspondiente a la solicitud de fe de hechos respecto de las direcciones electrónicas proporcionadas; asimismo se remitió el Acta Circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/3/2021 en disco compacto, mediante la cual se certificó el contenido de las direcciones electrónicas referidas. (Fojas 198 a la 225 del expediente)

XV. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad Técnica de Fiscalización.

a) El primero de junio de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/452/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría), para que indicara el precio más alto conforme a la matriz de precios aplicables en el estado Chiapas por concepto de edición de video, así como la documentación soporte que acredite los valores proporcionados por el concepto mencionado en relación con el procedimiento de mérito. (Fojas 248 a la 252 del expediente)

b) El dos de junio de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DA/656/2022, la Dirección de Auditoría, atendió la solicitud formulada, indicando el precio más alto conforme a la matriz de precios aplicable respecto al concepto solicitado.

XVI. Solicitud de información a la Dirección de Análisis Operacional y Administración de Riesgos de la Unidad Técnica de Fiscalización.

a) El primero de junio de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/447/2022, se solicitó a la Dirección de Análisis Operacional y Administración de Riesgos, su apoyo para que girara sus instrucciones para solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la información referente a los estados de cuenta de las instituciones bancarias correspondientes a nombre del C. Osvaldo Sandoval Quezada. (Fojas 229 a la 233 del expediente)

b) El veintiuno de junio de dos mil veintidós, se recibió el oficio INE/UTF/DAOR/1812/2022, relativo a la atención de la solicitud de información. A la cual anexó el oficio remitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; así como los estados de cuenta enviados por las instituciones bancarias correspondientes. (Fojas 298 a la 310 del expediente)

c) El primero de junio de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/450/2022, se solicitó a la Dirección de Análisis Operacional y Administración de Riesgos, su apoyo para que girara sus instrucciones para solicitar al Servicio de Administración Tributaria, la información referente a la declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal 2021 del C. Osvaldo Sandoval Quezada. (Fojas 244 y 247 del expediente)

d) El siete de junio de dos mil veintidós, se recibió el oficio INE/UTF/DAOR/1640/2022, relativo a la atención de la solicitud de información. A la cual anexó la respuesta del Servicio de Administración Tributaria y la declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal 2021 del C. Osvaldo Sandoval Quezada. (Fojas 259 y 260 del expediente)

XVII. Razón y Constancia.

a) El veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, se hizo constar para todos los efectos legales a que haya lugar, respecto del procedimiento administrativo sancionador electoral citado al rubro, que se ingresó al portal electrónico del Sistema Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, para efecto de buscar la contabilidad del C. Osvaldo Sandoval Quezada, a través de la dirección electrónica: <https://sif.ine.mx/menuUTF/>. (Foja 146 del expediente)

b) El dieciocho de febrero de dos mil veintidós, se hizo constar para todos los efectos legales a que haya lugar, respecto del procedimiento administrativo sancionador

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/163/2021/CHIS

electoral citado al rubro, que se ingresó al portal electrónico del Sistema Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, para efecto de buscar en la contabilidad del C. Osvaldo Sandoval Quezada gastos y/o aportaciones por concepto de publicidad en la red social de Facebook, a través de la dirección electrónica: <https://sif.ine.mx/menuUTF/>. (Fojas 226 a la 228 del expediente)

c) El uno de junio de dos mil veintidós, se hizo constar para todos los efectos legales a que haya lugar, respecto del procedimiento administrativo sancionador electoral citado al rubro, que se ingresó a las ligas aportadas como pruebas por el quejoso. (Fojas 253 a la 258 del expediente)

XVIII. Acuerdo de Alegatos.

Mediante acuerdo de fecha veintidós de junio de dos mil veintidós, la Unidad Técnica de Fiscalización declaró abierta la etapa de alegatos en el expediente INE/Q-COF-UTF/163/2021/CHIS.

Notificación al quejoso:

a) El veintidós de junio de dos mil veintidós, mediante el oficio INE/UTF/DRN/14440/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al quejoso, la apertura a la etapa de alegatos del procedimiento administrativo sancionador número de expediente **INE/Q-COF-UTF/163/2021/CHIS**.

b) A la fecha del presente, el quejoso no presentó escrito de alegatos.

Notificación a las partes incoadas:

Notificación al partido Morena

a) El veintidós de junio de dos mil veintidós, mediante el oficio INE/UTF/DRN/14439/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Responsable de Finanzas del partido Morena en el estado de Chiapas, la apertura a la etapa de alegatos del procedimiento administrativo sancionador número de expediente **INE/Q-COF-UTF/163/2021/CHIS**

b) El veinticuatro de junio de dos mil veintidós se recibió escrito de alegatos.

Notificación al C. Osvaldo Quezada Sandoval

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/163/2021/CHIS

a) El veintidós de junio de dos mil veintidós, se acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Chiapas del Instituto Nacional Electoral y/o al Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital correspondiente, realizara lo conducente a efecto de notificar al C. Osvaldo Sandoval Quezada, la apertura a la etapa de alegatos del procedimiento administrativo sancionador número de expediente **INE/Q-COF-UTF/163/2021/CHIS**

b) El veintitrés de junio de dos mil veintidós, mediante el oficio INE/08JDE/VE/257/2022, la Junta Local Ejecutiva del estado de Chiapas del Instituto Nacional Electoral, notificó al C. Osvaldo Sandoval Quezada, la apertura a la etapa de alegatos del procedimiento administrativo sancionador número de expediente **INE/Q-COF-UTF/163/2021/CHIS**

c) A la fecha del presente, el quejoso no presentó escrito de alegatos.

XIX. Cierre de instrucción. El catorce de noviembre de dos mil veintidós, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente.

XX. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se formuló el Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la Décima Octava Sesión Extraordinaria de fecha quince de noviembre de dos mil veintidós, en los términos siguientes:

- En lo **general** por unanimidad de votos de los integrantes presentes de la Comisión de Fiscalización, las Consejeras Electorales Dra. Adriana M. Favela Herrera; Dra. Carla Astrid Humphrey Jordan, los Consejeros Electorales Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona, Dr. Ciro Murayama Rendón, el Presidente de la Comisión de Fiscalización, Mtro. Jaime Rivera Velázquez.
- En lo **particular** por cuanto hace a la matriz de precios utilizada para la determinación del monto involucrado, en los términos propuestos por la Unidad Técnica de Fiscalización, aprobado por cuatro votos a favor de la Consejera Electoral Dra. Adriana M. Favela Herrera; y los Consejeros Electorales Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona, Dr. Ciro Murayama Rendón, el Presidente de la Comisión de Fiscalización, Mtro. Jaime Rivera Velázquez; y un voto en contra de la Consejera Electoral Dra. Carla Astrid Humphrey Jordan.

En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del procedimiento administrativo oficioso en que se actúa, se determina lo conducente.

C O N S I D E R A N D O

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, numeral 1, inciso g); tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente proyecto de Resolución y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General.

Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.

En este sentido, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, base V, apartado B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que procedan.

2. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento.

Que por tratarse de una cuestión de orden público y en virtud de que el que el artículo 30, numeral 2² en relación con el 32, numeral 1, fracción II y 30 numeral 1, fracción VI del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, establece que las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio, se estudian en el presente caso para determinar si se actualiza o sobreviene alguna de ellas, pues de ser así deberá decretarse el sobreseimiento

² “**Artículo 30. Improcedencia.** (...) 2. La Unidad Técnica realizará de oficio el estudio de las causas de improcedencia del procedimiento; en caso de advertir que se actualiza una de ellas elaborará el Proyecto de Resolución respectivo.”

del escrito de queja que nos ocupa, al existir un obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia planteada.

Es decir, cuando se analiza una denuncia por la presunta comisión de irregularidades en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos, la autoridad debe estudiar de manera integral y cuidadosa el escrito de queja respectivo, junto con el material probatorio que se aporte para determinar si se acredita en un primer momento los elementos de procedencia de la queja, a efecto de proveer conforme a derecho sobre su pronunciamiento y, en este último caso, justificar que se está ante un supuesto evidente que autorice sobreseer la queja o denuncia.

Visto lo anterior, este Consejo General advierte que, de la lectura al escrito de queja, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 30, numeral 1, fracción VI, con relación al artículo 31, numeral 1, fracción I del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, los cuales establecen lo siguiente:

“Artículo 30
Improcedencia

1. El procedimiento será improcedente cuando:

(...)

VI. La Unidad Técnica resulte incompetente para conocer los hechos denunciados. *En estos casos, sin mayor trámite y a la brevedad se resolverá de plano sobre la incompetencia, y el expediente se remitirá a la autoridad u órgano que resulte competente para conocer del asunto;*

(...)

Artículo 32.
Sobreseimiento

1. El procedimiento podrá sobreseerse cuando:

(...)

II. Admitida la queja se actualice alguna causal de improcedencia.

(...)

Artículo 30.

Improcedencia

1. El procedimiento será improcedente cuando:

(...)

VI. La Unidad Técnica resulte incompetente para conocer los hechos denunciados. En estos casos, sin mayor trámite y a la brevedad se resolverá de plano sobre la incompetencia, y el expediente se remitirá a la autoridad u órgano que resulte competente para conocer del asunto.

(...)”

En este orden de ideas, de la normatividad antes señalada se advierte lo siguiente:

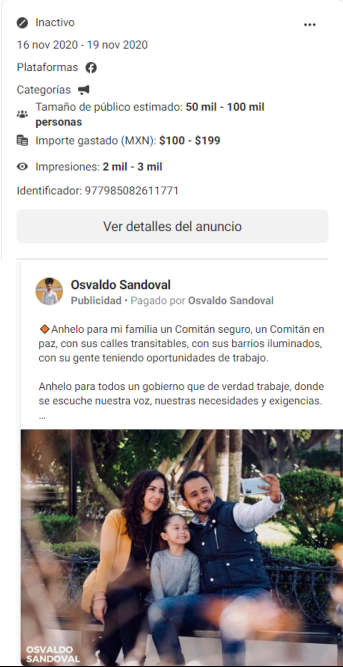

- Que la autoridad electoral fiscalizadora debe ser competente para conocer de los hechos narrados en el escrito de queja.
- Que en caso de haber sido admitida la queja y actualizarse alguna causal de improcedencia la Unidad Técnica de Fiscalización elaborará y someterá a la aprobación de la Comisión de Fiscalización, el Proyecto de Resolución que sobresea el procedimiento.

En el caso que nos ocupa parte de los hechos denunciados versan sobre presuntos hechos acontecidos en periodo anterior al inicio de la precampaña, es decir podrían actualizarse actos anticipados de precampaña, conducta de la cual esta autoridad es incompetente para pronunciarse al respecto.

Cabe precisar que el 6 de mayo de 2021, mediante oficio INE/UTF/DRN/18524/2021 esta autoridad hizo del conocimiento del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas los hechos que consignan el escrito de queja, toda vez que del estudio de los mismos se advirtió que algunas de las publicaciones denunciada fueron realizada en el periodo previo a la precampaña, razón por la cual podría actualizarse la existencia de actos anticipados de precampaña, sin embargo, la autoridad competente para resolver al respecto en virtud del ámbito territorial es el Organismo Público Local Electoral.

Derivado de lo anterior, esta autoridad no se pronunciará en la presente Resolución respecto de las publicaciones precisadas en la siguiente tabla:

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/163/2021/CHIS

Fecha	Link	Modo	Prueba exhibida
16/11/2020 – 19/11/2020	https://www.facebook.com/ads/library/?id=977985082611771	Publicación en Facebook	
21/11/2020- 23/11/2020	https://www.facebook.com/ads/library/?id=192151849200273	Publicación en Facebook	

Lo anterior debido a que esta autoridad considera que la denuncia presentada por el C. Oscar Juárez García se encuentra vinculada con la presunta vulneración de normatividad electoral del ámbito local, y cuya vía de resolución se encuentra establecida en el artículo 440, fracción 1 incisos a), b), c) y d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que menciona:

***“Artículo 440.** - Las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de los procedimientos sancionadores, tomando en cuenta las siguientes bases:*

a) Clasificación de procedimientos sancionadores en procedimientos ordinarios que se instauran por faltas cometidas dentro y fuera de los procesos electorales y especiales sancionadores, expeditos, por faltas cometidas dentro de los procesos electorales;

b) Sujetos y conductas sancionables;

c) Reglas para el inicio, tramitación, órganos competentes e investigación de ambos procedimientos;

d) Procedimiento para dictaminación para la remisión de expedientes, al Tribunal Electoral, para su resolución, tanto en el nivel federal como local, y”

Lo anterior en relación con lo previsto en lo previsto por los artículos 270, numeral 1 fracción I, II y XIII, 272, numeral 1, fracciones I y IV, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

"Artículo 270.

1. Son infracciones de los Partidos Políticos las siguientes:

I. Por actualizar supuestos normativos de violaciones graves a los principios rectores de la función electoral.

II. Incumplir las disposiciones establecidas en la legislación electoral...

(...)

VIII. Realizar actos anticipados de precampaña y campaña..."

"Artículo 272

1. Son infracciones de las y los aspirantes a candidato independiente, precandidatos, candidatos de Partido Político o coalición, y los candidatos independientes, las siguientes:

I. incumplir las disposiciones establecidas en la legislación electoral...

(...)

IV. Realizar actos anticipados de precampaña o campaña, según sea el caso,

Asimismo, el artículo 287 del precepto legal antecitado establece que el procedimiento especial sancionador será instrumentado por actos anticipados de precampaña.

En consecuencia, este Consejo General advierte la imperiosa necesidad de sobreseer el escrito de queja en razón de la notoria incompetencia, al no conocer de los hechos denunciados. Lo anterior, al advertirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 30, numeral 2, en relación con el artículo 32, numeral 1, fracción II y 30, numeral 1, fracción VI; ambos del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por los argumentos vertidos anteriormente, se **sobresee** la queja por cuanto hace a lo analizado en el presente considerando.

3. Estudio de fondo.

3.1 Objeto de investigación.



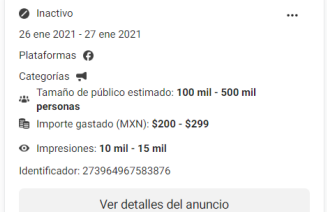
Tomando en consideración los hechos denunciados, así como del análisis de las actuaciones y documentos que integran el expediente, se tiene que el fondo del presente asunto se constriñe en determinar si los sujetos obligados inobservaron las obligaciones previstas en los preceptos normativos siguientes:

Conducta	Marco normativo aplicable
Egreso no reportado	Artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.
Omisión de presentar el informe de precampaña	Artículo 79, numeral 1, inciso a), fracciones I, II y III Ley General de Partidos Políticos y 223, numeral 6, inciso a) del Reglamento de Fiscalización.



Sujetos obligados materia de investigación:	
Nombre:	Osvaldo Sandoval Quezada
Cargo contendido:	Precandidato a Presidente Municipal
Municipio:	Comitán de Domínguez.
Entidad federativa:	Chiapas
Partido postulante:	Morena

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/163/2021/CHIS


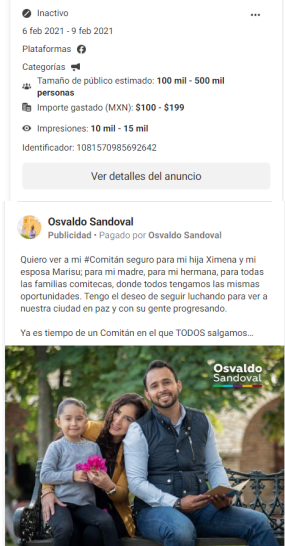
Lo anterior respecto de los hechos denunciados siguientes:

Tabla 1. Relación de hechos materia de la controversia ELEMENTOS PROPAGANDISTICOS DENUNCIADOS				
ID	Fecha	Link	Modo	Prueba exhibida
1	26/01/2021	https://www.facebook.com/ads/library/?id=2761957314065255/?id=2761957314065255	Publicación en Facebook	 <p> Inactivo 26 ene 2021 - 26 ene 2021 Plataformas Categorías Tamaño de público estimado: 50 mil - 100 mil personas Importe gastado (MXN): <\$100 Impresiones: 4 mil - 5 mil Identificador: 2761957314065255 Ver detalles del anuncio </p> <p> Osvaldo Sandoval Publicidad • Pagado por Osvaldo Sandoval ¡Nos vamos a levantar juntos! es momento de apoyar a nuestros amigos comerciantes comitecos 🙌🙌 -Osvaldo Sandoval- #ConsumeLocalComitán #EchalesLaMano </p> 
2	26/01/2021 – 27/01/2021	https://www.facebook.com/ads/library/?id=2761957314065255/?id=273964967583876	Publicación en Facebook	 <p> Inactivo 26 ene 2021 - 27 ene 2021 Plataformas Categorías Tamaño de público estimado: 100 mil - 500 mil personas Importe gastado (MXN): \$200 - \$299 Impresiones: 10 mil - 15 mil Identificador: 273964967583876 Ver detalles del anuncio </p>

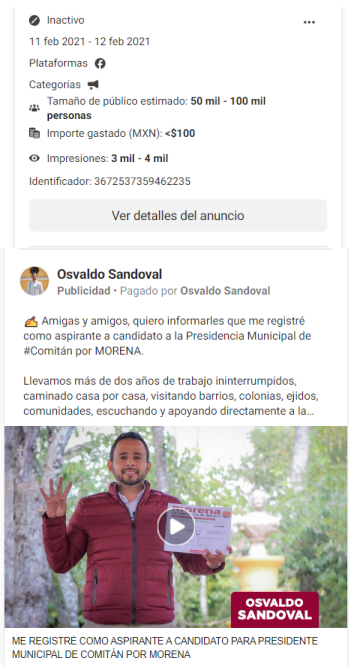
CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/163/2021/CHIS

Tabla 1. Relación de hechos materia de la controversia ELEMENTOS PROPAGANDISTICOS DENUNCIADOS				
ID	Fecha	Link	Modo	Prueba exhibida
				 <p>A screenshot of a Facebook post by Osvaldo Sandoval. The post includes a profile picture, the name 'Osvaldo Sandoval', and the text 'Publicidad • Pagado por Osvaldo Sandoval'. The main text reads: 'Quiero ver a Comitán seguro para mi hija Ximena y mi esposa Marisu; para mi madre, mi abuela, mi hermana, para todas las familias comitecas. ¡Juntos lo haremos posible! #Sigueme'. Below the text is a photo of a family (a man, a woman, and a child) sitting on a bench. At the bottom, it says 'Osvaldo Sandoval Public Figure' and 'A 9,813 personas les gusta esto'.</p>
3	26/01/2021 – 27/01/2021	https://www.facebook.com/ads/library/?id=2761957314065255/?id=122266103027434	Publicación en Facebook	 <p>A screenshot showing the details of a Facebook advertisement. The top section shows the ad status as 'Inactivo' (Inactive) for the period '26 ene 2021 - 27 ene 2021'. It lists the platform as 'Facebook', categories as 'personas', and provides statistics: 'Tamaño de público estimado: 50 mil - 100 mil', 'Importe gastado (MXN): <\$100', and 'Impresiones: 2 mil - 3 mil'. Below this is a button 'Ver detalles del anuncio'. The bottom section shows the ad content, including the name 'Osvaldo Sandoval', the text 'Publicidad • Pagado por Osvaldo Sandoval', and the message 'Recuperemos la grandeza de nuestra ciudad. ¡Juntos es posible! 🇲🇽'. It also includes the text '-Osvaldo Sandoval-' and 'Foto: ADV Medios Visuales' above a large aerial photograph of a city.</p>

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/163/2021/CHIS

<p style="text-align: center;">Tabla 1. Relación de hechos materia de la controversia ELEMENTOS PROPAGANDISTICOS DENUNCIADOS</p>				
ID	Fecha	Link	Modo	Prueba exhibida
4	26/01/2021 – 27/01/2021	https://www.facebook.com/ads/library/?id=472668230394642	Publicación en Facebook	
5	06/02/2021- 09/02/2021	https://www.facebook.com/ads/library/?id=1081570985692642	Publicación en Facebook	

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/163/2021/CHIS

Tabla 1. Relación de hechos materia de la controversia ELEMENTOS PROPAGANDISTICOS DENUNCIADOS				
ID	Fecha	Link	Modo	Prueba exhibida
6	11/02/2021- 12/02/2021	https://www.facebook.com/ads/library/?id=3672537359462235	Publicación en Facebook	

Una vez fijada la competencia, al no existir cuestiones de previo y especial pronunciamiento por resolver; y habiendo analizado los documentos y las actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el fondo del presente asunto se constriñe en determinar si el partido político Morena, así como el C. Osvaldo Sandoval Quezada, realizaron actos de precampaña durante el Proceso Electoral Concurrente 2020 – 2021, y en consecuencia omitieron presentar el informe de ingresos y gastos al cargo de Presidente Municipal de Comitán de Domínguez, Chiapas.

Así, por conveniencia metodológica, se procederá en primer término a exponer los hechos acreditados, y posteriormente a colegir si estos, a la luz de las obligaciones a que se encuentra compelido el precandidato denunciado, actualiza transgresión alguna al marco normativo en materia de fiscalización.

3.2 Acreditación de los hechos.

Por cuanto hace al presente apartado, se procede en primer término a enlistar los elementos de prueba que obran en el expediente, su eficacia probatoria y las conclusiones obtenidas tras su adminiculación.

A. Elementos de prueba ofrecidos por el quejoso

A.1. Pruebas técnicas

Listado e imágenes de las publicaciones en la red social Facebook.





A efecto de economía en la exposición, téngase por reproducida la **Tabla 1. Relación de hechos materia de la controversia**, en la cual, se detallan los links de los hallazgos denunciados, así como, el periodo en el cual fueron realizados.

B. Elementos de prueba obtenidos por la autoridad durante la instrucción del procedimiento.

Al respecto, las indagatorias efectuadas y los elementos de prueba obtenidos son los siguientes:




Tabla 2 Relación de pruebas aportadas y hallazgos de la autoridad ELEMENTOS PROPAGANDISTICOS DENUNCIADOS					
ID	Fecha	Link	Modo	Prueba exhibida	Hallazgo autoridad Acta: INE/DS/OE/CIRC/3/2022
1	26/01/2021	https://www.facebook.com/ads/library/?id=2761957314065255/?id=2761957314065255	Publicación en Facebook		

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/163/2021/CHIS





Tabla 2 Relación de pruebas aportadas y hallazgos de la autoridad ELEMENTOS PROPAGANDISTICOS DENUNCIADOS					
ID	Fecha	Link	Modo	Prueba exhibida	Hallazgo autoridad Acta: INE/DS/OE/CIRC/3/2022
					
2	26/01/2021 – 27/01/2021	https://www.facebook.com/ads/library/?id=2761957314065255/?id=273964967583876	Publicación en Facebook		

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/163/2021/CHIS

Tabla 2
Relación de pruebas aportadas y hallazgos de la autoridad
ELEMENTOS PROPAGANDISTICOS DENUNCIADOS

ID	Fecha	Link	Modo	Prueba exhibida	Hallazgo autoridad Acta: INE/DS/OE/CIRC/3/2022
3	26/01/2021 – 27/01/2021	https://www.facebook.com/ads/library/?id=2761957314065255/?id=122266103027434	Publicación en Facebook	 <p>Inactivo</p> <p>26 ene 2021 - 27 ene 2021</p> <p>Plataformas</p> <p>Categorías</p> <p>Tamaño de público estimado: 50 mil - 100 mil personas</p> <p>Importe gastado (MXN): <\$100</p> <p>Impresiones: 2 mil - 3 mil</p> <p>Identificador: 122266103027434</p> <p>Ver detalles del anuncio</p> <p>Oswaldo Sandoval</p> <p>Publicidad • Pagado por Oswaldo Sandoval</p> <p>Recuperemos la grandeza de nuestra ciudad. ¡Juntos es posible!</p> <p>-Oswaldo Sandoval-</p> <p>Foto: ADV Medios Visuales</p>	 <p>Investigación</p> <p>26 ene 2021 - 27 ene 2021</p> <p>Plataformas</p> <p>Categorías</p> <p>Tamaño de público estimado: 50 mil - 100 mil personas</p> <p>Importe gastado (MXN): <\$100</p> <p>Impresiones: 2 mil - 3 mil</p> <p>Identificador: 122266103027434</p> <p>Ver detalles del anuncio</p> <p>Oswaldo Sandoval</p> <p>Publicidad • Pagado por Oswaldo Sandoval</p> <p>Recuperemos la grandeza de nuestra ciudad. ¡Juntos es posible!</p> <p>Oswaldo Sandoval</p> <p>Foto: ADV Medios Visuales</p>
4	26/01/2021 – 27/01/2021	https://www.facebook.com/ads/library/?id=472668230394642	Publicación en Facebook	 <p>Inactivo</p> <p>26 ene 2021 - 27 ene 2021</p> <p>Plataformas</p> <p>Categorías</p> <p>Tamaño de público estimado: 50 mil - 100 mil personas</p> <p>Importe gastado (MXN): <\$100</p> <p>Impresiones: 3 mil - 4 mil</p> <p>Identificador: 472668230394642</p> <p>Ver detalles del anuncio</p>	

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/163/2021/CHIS

Tabla 2 Relación de pruebas aportadas y hallazgos de la autoridad ELEMENTOS PROPAGANDISTICOS DENUNCIADOS					
ID	Fecha	Link	Modo	Prueba exhibida	Hallazgo autoridad Acta: INE/DS/OE/CIRC/3/2022
					
5	06/02/2021-09/02/2021	https://www.facebook.com/ads/library/?id=1081570985692642	Publicación en Facebook		

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/163/2021/CHIS

Tabla 2 Relación de pruebas aportadas y hallazgos de la autoridad ELEMENTOS PROPAGANDISTICOS DENUNCIADOS					
ID	Fecha	Link	Modo	Prueba exhibida	Hallazgo autoridad Acta: INE/DS/OE/CIRC/3/2022
6	11/02/2021- 12/02/2021	https://www.facebook.com/ads/library/?id=3672537359462235	Publicación en Facebook		

C. Elementos de prueba presentados por el denunciado.

C1. Informe que rinde el C. Sergio Carlos Gutiérrez Luna, representante propietario del partido Morena ante el Consejo General del INE en respuesta al emplazamiento formulado.

Respecto del análisis al escrito de respuesta, se advierte que el sujeto obligado manifestó que esta queja está basada en hechos que no son imputables al partido y al supuesto precandidato, toda vez que su representado no realizó registro de precandidatos ante el Registro Nacional de Precandidatos y Candidatos, ni ejerció gastos concernientes a la etapa de precampaña, hecho que fue notificado en tiempo y forma a la Unidad Técnica de Fiscalización, por lo que en ningún momento el partido político Morena puede reconocer gastos de precampaña de algún candidato; aclarando que el ciudadano Osvaldo Sandoval Quezada, del cual erróneamente se hace referencia pertenece al partido político Morena, realmente es militante del partido político Nueva Alianza y se encontraba como aspirante a la Presidencia Municipal de Comitán de Domínguez, Chiapas por dicho partido.

D. Valoración de las pruebas y conclusiones.

D.1. Reglas de valoración

De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización serán objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos.

El mismo reglamento señala en su artículo 21 que las pruebas serán valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como los principios rectores de la función electoral, con el objeto de generar convicción sobre los hechos investigados.

Así, las documentales públicas, tomando en consideración su propia y especial naturaleza, detentan valor **probatorio pleno**, toda vez que fueron emitidas por autoridad en ejercicio de sus facultes, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. De conformidad con los artículos 16, numeral 1, fracción I; 20, numerales 1 y 4, así como 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos.

Por su parte, las documentales privadas y las pruebas técnicas, en principio sólo generan indicios, y harán prueba plena sobre la veracidad de los hechos, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. De conformidad con el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos.

D.2. Conclusiones.

Una vez que se dio cuenta de los elementos de convicción que obran en autos, del dato de prueba derivado, y enunciadas que fueron las reglas de valoración aplicables, se proceden a exponer las conclusiones a las que arriba esta autoridad tras su valoración conjunta.

De las constancias que obran en autos, consistentes en los medios probatorios aportados por el quejoso, se obtuvieron indicios sobre la existencia de los elementos controvertidos que constituyen la materia del presente asunto; sin embargo, los hechos denunciados se tienen por acreditados no por la eficacia probatoria de los

elementos de prueba exhibidos, sino por su concatenación con el procedimiento de validación realizada por esta Unidad, en el cual encontró correspondencia con las características de los hechos denunciados.

Es así que se tiene certeza de la existencia del contenido de los links e imágenes reproducidas en la **Tabla 1. Relación de hechos materia de la controversia. ELEMENTOS PROPAGANDISTICOS DENUNCIADOS.** De los cuales se advirtió la existencia de publicaciones realizadas por el C. Osvaldo Sandoval Quezada y por lo tanto se tienen acreditados los hechos.

3.3 Estudio relativo a la omisión de presentar el informe de precampaña.

A. Marco Normativo.

En este sentido, deberá determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracciones I, II y III de Ley General de Partidos Políticos; y 223, numeral 6, inciso a) del Reglamento de Fiscalización, mismos que para mayor referencia se transcriben a continuación:

Ley General de Partidos Políticos

“Artículo 79

1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes:

a) Informes de precampaña:

I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como los gastos realizados;

II. Los candidatos y precandidatos son responsables solidarios del cumplimiento de los informes de campaña y precampaña. Para tales efectos, se analizará de manera separada las infracciones en que incurran.

III. Los informes deberán presentarse a más tardar dentro de los diez días siguientes al de la conclusión de las precampañas;

(...)”

Reglamento de Fiscalización

“Artículo 223.

Responsables de la rendición de cuentas

(...)

6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición, serán responsables de:

a) Presentar su informe de gastos de precampaña o campaña al partido o coalición.

(...).”

De las premisas normativas antes transcritas se desprende que los partidos políticos tienen la obligación de presentar en tiempo, ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de precampaña en el marco de un Proceso Electoral. En ellos deberán informar sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

Lo anterior tiene como finalidad preservar los principios de la fiscalización, como son la transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante la obligación relativa a la presentación de informes. Ello implica la existencia de instrumentos a través de los cuales los partidos políticos rindan cuentas a la autoridad fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban, por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), coadyuvando a que esta autoridad cumpla con tareas de fiscalización encomendadas a cabalidad.

Así, es deber de los mencionados entes políticos informar en tiempo y forma de todos los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar. Para el correcto desarrollo de su contabilidad, los sujetos obligados deberán presentar una adecuada rendición de cuentas, cumpliendo los requisitos establecidos por la normatividad electoral, a través de la utilización de los instrumentos que la legislación establezca y permitiendo a la autoridad realizar las actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los sujetos a fiscalizar, es la rendición de cuentas ante la autoridad de manera transparente e inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora

electoral. En efecto, la finalidad ulterior es la de garantizar que la actividad de los entes políticos se conduzca en apego a los cauces legales.

Por tanto, se trata de normatividad que protege un bien jurídico de un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los sujetos obligados son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que se cometan en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.

En este tenor de ideas, esta autoridad reitera que el régimen relativo a la presentación de informes de precampaña para los diversos cargos de elección popular establece obligaciones diferenciadas para los precandidatos y partidos políticos. En esta tesitura, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización sino también lo son, de manera solidaria, todos los precandidatos. De esta forma, por lo que se refiere a las precampañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos, siendo ellos quienes deberán llevar control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de sus precandidatos.

Asimismo, respecto de la obligación en la entrega de informes de ingresos y gastos que deben presentar ante este Instituto Nacional Electoral, el orden normativo electoral impone obligaciones específicas con el fin de cumplir con dicho objetivo. Por lo que, existe una responsabilidad solidaria entre partidos políticos y precandidatos cuyo efecto se traduce en una determinación de responsabilidad correlativa con las obligaciones específicas a que cada sujeto se encuentra constreñido.

En este sentido, el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracción II, de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que *“Los candidatos y precandidatos son responsables solidarios del cumplimiento de los informes de campaña y precampaña. Para tales efectos se analizará de manera separada las infracciones en que incurran.”*

Así, esa responsabilidad solidaria, se ve normada por el artículo 223, numeral 6, inciso a), al señalar que los precandidatos postulados por partidos son responsables de presentar su informe de gastos de precampaña al partido que los postula.

En conclusión, los partidos políticos y los precandidatos se encuentran sujetos a presentar ante el órgano fiscalizador, informes de precampaña en los cuales se reporte el origen y el monto de la totalidad de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral; el cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación comprobatoria necesaria para verificar de manera integral el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y rendición de cuentas.

Dicho lo anterior, resulta de vital importancia acotar el marco conceptual, para sentar las bases de la determinación respecto a los hechos objetos de investigación que en derecho proceda, en los términos siguientes:

a) Proceso de selección interna.

El artículo 226, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone que el plazo legal para que los partidos políticos determinen, conforme a sus Estatutos, el procedimiento aplicable para la selección de sus personas candidatas a cargos de elección popular es de treinta días antes del inicio formal de los procesos internos de selección.

La determinación del procedimiento aplicable para los procesos de selección de candidatos a cargos de elección popular deberá señalar:

- La fecha de inicio del proceso interno;
- El método o métodos que serán utilizados;
- La fecha para la expedición de la convocatoria correspondiente;
- Los plazos que comprenderá cada fase del proceso interno;
- Los órganos de dirección responsables de su conducción y vigilancia; y
- La fecha de celebración de la asamblea electoral nacional, estatal, distrital o, en su caso, de realización de la jornada comicial interna.

En virtud de lo anterior, si bien la ley no prevé un método determinado al ser parte de la vida interna del partido, ni un plazo específico en que se deban llevar a cabo los procesos de selección interna de los candidatos que pretendan buscar la postulación por parte de un partido político, no puede pasar desapercibido que los actos de selección interna generan que los partidos, militantes, afiliados y

simpatizantes realicen actividades que son susceptibles de trascender al conocimiento de toda una comunidad o población entre la que se encuentran inmersas sus bases, a través de medios convencionales de publicidad (volantes, carteles, calendarios, etcétera) tendientes a lograr el consenso necesario para ser candidatos y expresar que cuentan con el perfil que se identifique con la ideología sustentada por el propio ente político; de ahí que en ocasiones, según lo que al efecto dispongan los estatutos respectivos, exista la necesidad de consultar a las bases partidistas, cuyo resultado se traduce en la elección del candidato idóneo para ser postulado.

b) Precampaña.

En términos del artículo 227, numerales 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se entiende por precampaña al conjunto de actos que realizan los partidos políticos, sus militantes y precandidatos(as) a candidaturas a cargos de elección popular debidamente registrados por cada partido; mientras que por actos de precampaña electoral, se entenderán a las reuniones públicas, asambleas, marchas y, en general, aquellos eventos en que las y los precandidatos a una candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como candidato a un cargo de elección popular.

Asimismo, el numeral 3 del citado precepto, señala que la propaganda de precampaña es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones, que durante el periodo establecido por la Ley y el que señale la convocatoria respectiva, difunden las y los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular con el propósito de dar a conocer sus propuestas.

El artículo 75 de la Ley General de Partidos Políticos dispone que el Consejo General a propuesta de la Comisión de Fiscalización, previo al inicio de las precampañas y de acuerdo con la naturaleza de las convocatorias emitidas por los partidos políticos, determinará el tipo de gastos que serán estimados como de precampaña. Concatenado con lo anterior, el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la ley en cita, impone la obligación a los partidos políticos de presentar informes de precampaña para cada uno de las y los precandidatos a candidatos a un cargo de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como los gastos realizados.

De ahí que, de conformidad con el artículo 195, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se estimarán como gastos de precampaña los relativos a propaganda

en diarios, revistas y otros medios impresos, operativos, de propaganda utilitaria o similares, de producción de los mensajes para radio y televisión, anuncios espectaculares, bardas, salas de cine y de internet, gastos realizados en encuestas y estudios de opinión que tengan por objeto conocer las preferencias respecto a quienes pretendan ser precandidatos(as) del partido político y cuyos resultados se den a conocer durante el proceso de selección de candidatos.

c) Concepto de persona precandidata.

En términos del artículo 227 numeral 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, precandidato(a) es “el ciudadano que pretende ser postulado por un partido político como candidato a cargo de elección popular, conforme a esta Ley y a los Estatutos de un partido político, en el proceso de selección interna de candidatos a cargos de elección popular.”

Por su parte, el artículo 4, numeral 1, inciso pp) del Reglamento de Fiscalización establece lo siguiente:

“Artículo 4. Glosario

1. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:

(...)

pp) Precandidato: Ciudadano que conforme a la Ley de Partidos y a los Estatutos de un partido político, participa en el proceso de selección interna de candidatos para ser postulado como candidato a cargo de elección popular.”

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha definido a los precandidatos, en su glosario de términos³, de la siguiente manera:

“Es el ciudadano que participa en la elección interna de algún partido político, cuya finalidad es obtener oficialmente la candidatura del partido para desempeñar un cargo de elección popular.”

En este sentido, es dable señalar que los ciudadanos que pretendan ser postulados por un partido político como **candidato a cargo de elección popular, deben ser considerados como precandidatos(as), con independencia de que obtuvieran**

³ Disponible en la página web: <https://www.te.gob.mx/front/glossary/>

del órgano partidista facultado para ello, algún tipo de registro con la denominación de precandidatos(as).

Lo anterior es congruente con lo razonado por la Sala Superior del TEPJF al resolver Recurso de Apelación SUP-RAP-121/2015 y Acumulado cuya parte se transcribe a continuación:

*“A juicio de esta Sala Superior no asiste la razón a los actores porque conforme a lo establecido en el artículo 227, párrafo 4, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, **se colige que un precandidato es en términos generales un ciudadano que pretende ser postulado por un partido político como candidato a algún cargo de elección popular, conforme a esta Ley y al Estatuto de un partido político, en el procedimiento de selección interna de candidatos a cargos de elección popular, sin que tal calidad se constriña, conforme a la ley, a algún procedimiento de selección en particular como lo aducen los demandantes.** El texto del mencionado precepto legal es al tenor literal siguiente:*

‘Artículo 227. [...]

4. Precandidato es el ciudadano que pretende ser postulado por un partido político como candidato a cargo de elección popular, conforme a esta Ley y a los Estatutos de un partido político, en el proceso de selección interna de candidatos a cargos de elección popular.’

Aunado a lo anterior, es importante destacar que, conforme a lo previsto en la CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE LAS CANDIDATURAS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA AL CARGO DE GOBERNADOR, DIPUTADOS LOCALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, PRESIDENTES MUNICIPALES, SÍNDICOS Y REGIDORES DE LOS H. AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN, de manera particular en la Base 7, denominada “DE LAS NORMAS DE PRECAMPAÑA” se estableció:

*7.6 Todos los **contendientes** deberán denominarse públicamente como precandidatos o precandidatas, debiendo utilizar el logotipo, colores y emblemas del Partido, en su propaganda, en la cual además deberán identificar que se trata de una elección interna del Partido.⁴*

⁴ Es importante señalar que la Base Primera de la Convocatoria de MORENA para el proceso de selección de las candidaturas para Presidentes y Presidentas Municipales; Síndicos y Síndicas; Regidores y Regidoras de los Ayuntamientos; para el proceso electoral local 2018 – 2019 en el Estado de Aguascalientes establece en su último párrafo lo siguiente: “(...) Queda estrictamente prohibido que los/as aspirantes realicen acusaciones públicas contra el partido, sus órganos de Dirección u otros aspirantes o protagonistas, o cometan actos de violencia física o moral contra otros miembros o el patrimonio del partido. La falta a esta disposición será sancionada con la cancelación del registro de la **precandidatura** correspondiente.”

En este contexto, se debe destacar que, con independencia de que obtuvieran del órgano partidista facultado para ello, algún tipo de registro como precandidatos, lo cierto es que tanto el partido político recurrente como cada uno de los actores del juicio para la protección de los derechos políticoelectorales en sus escritos de demanda aceptan que cada uno de ellos tuvieron el carácter de aspirante a candidato a diputado o a integrante de ayuntamiento, en consecuencia, tal afirmación constituye un reconocimiento expreso, por lo que se trata de un hecho no controvertido en términos de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

*En tal orden de ideas esta Sala Superior considera que **la hipótesis prevista en los artículos 79, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la Ley General de Partidos Políticos y 445, párrafo 1, inciso d), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, no restringe la obligación de presentar informes de precampaña, a las personas electas a través del método de contienda interna por voto universal, libre, directo y secreto, en los Distritos Electorales Locales y Municipios en los que no se reservaron candidaturas o bien en los casos en los que sean designados de un conjunto de aspirantes. [...]***

‘Artículo 445.

1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley: [...]

d) No presentar el informe de gastos de precampaña o campaña establecidos en esta Ley;’

*(...) lo cierto es que de los preceptos trasuntos, particularmente de lo dispuesto en el artículo, 445, párrafo 1, inciso d), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se puede colegir que, **con independencia de la denominación específica que reciban los contendientes en el procedimiento de selección interna de candidaturas existe el deber de presentar informes de gastos de precampaña** o campaña, según el caso y, en tal sentido, constituye infracción a la normativa electoral el incumplimiento de tal obligación.*

*En este tenor, **tampoco tienen razón los demandantes al considerar que por el hecho de no haber sido registrados como precandidatos no tienen la obligación de presentar los informes correspondientes, pues si bien es cierto que atendiendo al método de elección pudiera ser que no tuvieran que llevar a cabo actos de precampaña, lo cierto es que la ley exige la presentación de informes sin hacer distinción alguna.***

(...)

Por tanto, no asiste la razón al partido político apelante al aducir que no tenía la obligación de presentar informes.

(...) a juicio de esta Sala Superior, (...) el artículo 79, párrafo 1, inciso a), fracciones II y III, los candidatos y precandidatos son responsables solidarios del cumplimiento de los informes de campaña y precampaña y que los informes deberán presentarse a más tardar dentro de los diez días siguientes al de la conclusión de las precampañas.

La interpretación que se hace de tales disposiciones es acorde a la teleología de las normas a partir de las recientes reformas constitucionales y legales en materia electoral, conforme a las cuales se fijó entre los principales objetivos:

- La eficiencia en la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, dada su relación con la equidad en los procedimientos electorales.*
- Integrar un esquema de fiscalización, rendición de cuentas y acceso a la información pública que permita conocer no sólo a los propios militantes, sino a los ciudadanos en general en qué se gastan los recursos públicos asignados a los partidos.*
- Evitar el ocultamiento, el financiamiento paralelo, la doble contabilidad y el respeto a los topes de gastos de campaña.*

Al efecto se citan los párrafos atinentes de la Exposición de Motivos de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS

*‘[...] En este sentido, la Iniciativa que hoy sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía tiene por objeto, además de dar cumplimiento al citado mandato constitucional, establecer una legislación que regule de manera eficaz a los partidos políticos existentes en el país, ya sea nacionales o locales, en aspectos tales como su integración, registro, participación política, representación, acceso a la información pública, **así como la fiscalización y el régimen de sanciones por incumplimiento a las disposiciones en materia electoral.***

Incluso en la discusión de la citada reforma constitucional, los aspectos antes mencionados se consideraban como asuntos

internos de los partidos políticos, por lo que no era posible realizar una fiscalización efectiva, aun cuando disponen de presupuesto público. Adicionalmente, los mecanismos para definir a los candidatos a cargos de elección popular eran cuestionados tanto al interior del partido como al exterior, con el argumento, por ejemplo, de la permanencia de las mismas estructuras en órganos de gobierno, circunstancia que obstruye la generación de nuevos cuadros políticos y de representación.

Ante este escenario, resulta de vital importancia limitar el espacio discrecional de los partidos políticos, trasladando a la esfera de lo público aquellos aspectos que garanticen por un lado, el acceso efectivo de los ciudadanos al poder público, por medio del establecimiento de derechos mínimos y obligaciones a cargo de los militantes; así como un esquema de fiscalización, rendición de cuentas y acceso a la información pública que permita conocer no sólo a los propios militantes, sino a los ciudadanos en general en qué se gastan los recursos públicos asignados a los partidos.

Además, se deben establecer condiciones de permanencia y en su caso, de cancelación del registro de partidos políticos, pues también es cuestionable la existencia de partidos políticos sin la suficiente legitimación social, al observarse desde una matriz de costo beneficio para el país. En congruencia con esto, no es tema menor el establecimiento de mecanismos de participación política, como las coaliciones y fusiones políticas, como paradigmas de fortalecimiento electoral de los partidos políticos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

‘Mención particular merecen la regulación que se propone en las materias siguientes:

1. Fiscalización efectiva y oportuna de los recursos que utilicen las asociaciones políticas y candidaturas. Se revoluciona el modelo de fiscalización de los recursos de partidos políticos y candidaturas, pasando de la simple revisión de informes presentados por los sujetos obligados, a un esquema de seguimiento de realización de gastos y registro en línea, con padrón de proveedores y mecanismos de vigilancia y monitoreo, de tal suerte que la presentación de informes marquen la conclusión del proceso de fiscalización y no su inicio, tan sólo a la espera de su dictaminación final,

que en el caso de las informes de gastos de campaña sea, de ser el caso, parte de los elementos de la declaración de validez de las elecciones.

*Estableciendo para los mecanismos de rendición de cuentas y de vigilancia y verificación de las mismas el principio de máxima publicidad **con el objetivo de evitar el ocultamiento, el financiamiento paralelo, la doble contabilidad y el respeto a los topes de gastos de campaña.***

*En este orden de ideas, a juicio de esta Sala Superior sería contrario al sentido de la reforma constitucional y legal excluir a determinados sujetos obligados, del cumplimiento **de las normas en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, máxime que las normas atinentes no vinculan la presentación de los informes al hecho de llevar a cabo o no, actos de precampaña**, por tanto es deber de los sujetos obligados conforme a la Ley, con independencia de que no hayan llevado a cabo actos de campaña, **presentar los informes de precampaña** conforme a lo previsto en los artículos 79, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la Ley General de Partidos Políticos y 445, párrafo 1, inciso d), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.”*

Es preciso señalar que ese asunto que resolvió el máximo órgano jurisdiccional tuvo como objeto de estudio, entre otras cosas, determinar si diversos ciudadanos que participaron en el proceso de selección adquirieron la calidad de precandidatos(as) y con ello la obligación de presentar los informes de precampañas de ingresos y egresos en el Proceso Electoral 2014-2015, y como se transcribió en líneas anteriores, resolvió que con independencia de la denominación específica que reciban los contendientes en el procedimiento de selección interna de candidaturas existe el deber de presentar informes de gastos de precampaña o campaña, según el caso y, en tal sentido, constituye infracción a la normativa electoral el incumplimiento de tal obligación.

En ese sentido determinó que en el referido asunto no le asistía la razón al actor al considerar que por el hecho de no haber sido registrados como precandidatos(as) no tienen la obligación de presentar los informes correspondientes, pues si bien, atendiendo al método de elección pudiera ser que no tuvieran que llevar a cabo actos de precampaña, lo cierto es que la ley exige la presentación de informes sin hacer distinción alguna.

De manera análoga, la Sala Regional correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, con sede en Monterrey, del TEPJF, al resolver el Juicio de Revisión Constitucional y para la Protección de los Derechos Político-Electorales

del Ciudadano identificados como SM-JRC-71/2016 y SM-JDC-244/2016, realizó razonamientos similares, cuya parte se transcribe a continuación:

*“En principio, es de mencionarse que MORENA y María Soledad Luévano Cantú sí estaban obligados a presentar el referido informe, ya que **el carácter de precandidata de la referida ciudadana quedó acreditado mediante el Dictamen de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA sobre el Proceso Interno Local en el Estado de Zacatecas**, de veintinueve de enero del presente año (...)*

Por otra parte, esta Sala Regional ha sostenido que la obligación de los partidos de presentar informes tiene como finalidad preservar los principios de la fiscalización, como lo son la transparencia y la rendición de cuentas, ya que el informe es el instrumento a través del cual los partidos rinden cuentas respecto del origen de sus recursos así como el destino de su aplicación, por tanto, es solo a través de su presentación que la autoridad puede llevar a cabalidad sus tareas de fiscalización.

*En ese sentido, **MORENA sí estaba obligado a presentar el informe de precampaña** de María Soledad Luévano Cantú, **con independencia de la realización o no de actos de precampaña, pues sólo de esta manera la autoridad puede realizar su labor de fiscalización.***

Por otra parte, no se comparte la afirmación del partido promovente en cuanto que la presentación de los informes de precampaña sea solo “una mera formalidad”, esto se debe a que, de conformidad con lo establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción III, de la Ley General de Partidos Políticos, así como 443, numeral 1, inciso d), de la LEGIPE, los partidos políticos tienen la obligación de presentar, dentro del plazo previsto, los respectivos informes de precampaña y campaña, con la finalidad de transparentar su actuación y rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora.

En ese sentido, la conducta que obstaculice la rendición de cuentas, como lo es la omisión o presentación extemporánea de los informes de ingresos y gastos de los precandidatos y candidatos de los partidos políticos, debe considerarse como una falta sustantiva, por tratarse de un daño directo al bien jurídico relacionado con la rendición de cuentas y a los principios de fiscalización, que impide garantizar, de manera oportuna, la transparencia y conocimiento del manejo de los recursos públicos.

Conforme a lo expuesto, se constata el incumplimiento de MORENA en materia de fiscalización al haber omitido presentar el informe de precampaña de María Soledad Luévano Cantú.”

En la resolución transcrita, la Sala Regional Monterrey del TEPJF razonó que los sujetos obligados sí tienen la obligación de presentar el informe de precampaña con independencia de la realización o no de actos de precampaña, pues sólo de esta manera la autoridad puede llevar a cabalidad sus tareas de fiscalización. También que la presentación de los informes no es una mera formalidad, toda vez que los partidos tienen la obligación de presentar, dentro del plazo previsto, en este caso, los informes de precampaña y ante la conducta que obstaculice la rendición de cuentas, como lo es la omisión de los informes, debe considerarse como una falta sustantiva, por tratarse de un daño directo al bien jurídico relacionado con la rendición de cuentas.

De lo hasta aquí expuesto, **se puede establecer que las personas que participen en los procesos de selección interna de candidatos y sean registrados de conformidad con los Estatutos**, Reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general que aprueben los órganos de dirección de cada partido político, con la finalidad de ser postulados y conseguir un cargo de elección popular, deben ser considerados precandidatos, con independencia de la denominación específica que reciban los contendientes en el proceso, y por ende, tienen la obligación de presentar el informe de gastos de precampaña.

Lo anterior es así, toda vez que, iniciado el Proceso Electoral correspondiente y de conformidad con el artículo 43, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Partidos Políticos, los partidos políticos deben contar con un órgano de decisión colegiada, responsable de la organización de la selección de candidatos a cargos de elección popular, ante el cual una vez emitida la convocatoria respectiva, la ciudadanía interesada deberá obtener su registro para adquirir la calidad de aspirante o precandidato para estar en posibilidad de participar en el Proceso Electoral Local o federal de mérito.

En ese sentido, se considera que cuando la convocatoria refiere a la figura de aspirante se entiende que se refiere a un precandidato(a), toda vez que con dichas calidades se busca el mismo objetivo, es decir, obtener una candidatura, ya sea a través de la celebración de la asamblea correspondiente o de la valoración y calificación de perfiles y en su caso la eventual aplicación de una encuesta, como acontece en el presente asunto. Lo anterior pone en evidencia que, con independencia de la denominación que se le dé a los precandidatos(as), se encuentran sujetos a la fiscalización de los recursos que se utilicen.

En este contexto, si bien la convocatoria emitida únicamente menciona la calidad de “aspirante”, lo cierto es que tal calidad debe entenderse atendiendo a la naturaleza del propósito con el que se convoca a las personas para que acudan al proceso de selección interna, esto es, ser postulado por el partido político como candidato a un cargo de elección popular.

De igual forma, conforme a los artículos 43, numeral 1, inciso c) y 77 de la Ley General de Partidos Políticos, entre los órganos internos de los partidos políticos, se encuentra el órgano responsable de la administración de su patrimonio y recursos financieros y generales, así como de la presentación de los informes respectivos de ingresos y egresos, entre los cuales se encuentra la presentación del informe de precampaña.

Lo anterior, guarda congruencia con lo establecido en el artículo 223, numerales 1, 3, inciso b) y 7, inciso a) del Reglamento de Fiscalización, al señalar que el responsable de finanzas del partido político de que se trate, será el responsable de:

- a) La presentación de los informes, su contenido y su documentación comprobatoria;
- b) Capacitar a los precandidatos en la aplicación del Reglamento de Fiscalización, debiendo contar con constancia escrita de ello; y
- c) Establecer las medidas de control interno necesarias para garantizar la aplicación estricta del Reglamento referido; cuyo incumplimiento tiene como consecuencia que se considere una infracción cometida por parte del partido político, en términos del artículo 226, numeral 1 incisos c) y k) del Reglamento de Fiscalización.

Así las cosas, se advierte una obligación específica por parte de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de sus precandidatos.

En este sentido, la obligación original de rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, toda vez que es el responsable de finanzas del partido político, el que debe presentar los informes de precampaña y de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, como sujeto principal de dicha obligación.

De esta manera, este Consejo General considera que la hipótesis prevista en los artículos 79, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la Ley General de Partidos Políticos y 445, párrafo 1, inciso d), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, no restringe la obligación de presentar informes de precampaña, a las personas electas a través del método de contienda interna por voto universal, libre,

directo y secreto, como se advierte del texto de los preceptos que se citan a continuación:

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

“Artículo 443.

1. Constituyen infracciones **de los partidos políticos** a la presente Ley:

(...)

d) No presentar los informes trimestrales, anuales, de **precampaña** o de campaña, o no atender los requerimientos de información de la unidad de fiscalización del Instituto, en los términos y plazos previstos en esta Ley y sus Reglamentos;”

“Artículo 445.

1. Constituyen infracciones **de los aspirantes, precandidatos** o candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley:

(...)

d) **No presentar el informe de gastos de precampaña o campaña establecidos en esta Ley;**”

Ley General de Partidos Políticos

Capítulo V.

***De los procesos de integración de órganos internos
y de selección de candidatos***

“Artículo 44

1.

Los procedimientos internos para la integración de los órganos internos de los partidos políticos y para la postulación de candidatos a cargos de elección popular, estarán a cargo del órgano previsto en el inciso d) del párrafo 1 del artículo anterior y se desarrollarán con base en los Lineamientos básicos siguientes:

(...)

IX. Fechas en las que **se deberán presentar los informes de ingresos y egresos de campaña o de precampaña, en su caso.**”

“Artículo 79.

1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes:

a) Informes de precampaña:

I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para

cada tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como los gastos realizados;

II. Los candidatos y precandidatos son responsables solidarios del cumplimiento de los informes de campaña y precampaña. Para tales efectos, se analizará de manera separada las infracciones en que incurran;

III. Los informes deberán presentarse a más tardar dentro de los diez días siguientes al de la conclusión de las precampañas;"

Asimismo, el Reglamento de Fiscalización aplicable establece:

"Artículo 3.

Sujetos obligados

1. Los sujetos obligados del presente Reglamento son:

- a) Partidos políticos nacionales.*
- b) Partidos políticos con registro local.*
- c) Coaliciones, frentes o fusiones que formen los Partidos Políticos Nacionales y locales.*
- d) Agrupaciones políticas nacionales.*
- e) Organizaciones de observadores electorales en elecciones federales.*
- f) Organizaciones de ciudadanos que pretendan obtener el registro como Partido Político Nacional.*
- g) Aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes a cargos de elección popular federales y locales.***
- h) Personas físicas y morales inscritas en el Registro Nacional de Proveedores.*

2. Los Partidos Políticos Nacionales con acreditación para participar en elecciones locales, tendrán el mismo trato que un partido político local en el ámbito de las elecciones locales y las obligaciones materia de este Reglamento.

*3. Los partidos, aspirantes, precandidatos, candidatos, candidatos independientes locales y federales **deberán inscribirse en el Sistema de Registro Nacional de Candidatos** de conformidad con los Lineamientos y requisitos que para tal efecto disponga el Instituto. La cuenta de correo electrónico proporcionada en el Registro Nacional de Candidatos será la base para que los sujetos obligados reciban avisos electrónicos, comunicados e información relacionada con los procesos de fiscalización a cargo del Instituto.*

Una vez realizada la inscripción en el Sistema antes citado, el Instituto entregará a cada aspirante, precandidato, candidato, y candidato independiente la cuenta de ingreso al Sistema de Contabilidad en Línea para la consulta de sus operaciones."

“Artículo 22.

De los informes

1. Los informes que deben presentar los sujetos obligados son los que establecen la Ley de Partidos y la Ley de Instituciones, y pueden clasificarse de la manera siguiente:

a) Informes del gasto ordinario:

I. Informes trimestrales.

II. Informe anual.

III. Informes mensuales.

b) Informes de Proceso Electoral:

I. Informes de precampaña.

II. Informes de obtención del apoyo ciudadano.

III. Informes de campaña.

c) Informes presupuestales:

I. Programa Anual de Trabajo.

II. Informe de Avance Físico-Financiero.

III. Informe de Situación Presupuestal.”

Así, de los preceptos normativos citados, se advierte que con independencia de la denominación específica que reciban los contendientes en el procedimiento de selección interna de candidaturas, existe el deber de presentar informes de gastos de precampaña, constituyendo una infracción a la normativa electoral el incumplimiento de tal obligación.

En consecuencia, la ciudadanía que participe en los procesos de selección interna de candidaturas para un cargo de elección popular y sea registrada de conformidad con los Estatutos, Reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general que aprueben los órganos de dirección de cada partido político, con la finalidad de ser postulados y conseguir un cargo de elección popular, deben ser considerados precandidatos, y, por ende, deben presentar el informe de precampaña correspondiente.

d) Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos (SNR)

Tal como se desprende de la normatividad señalada, son los partidos políticos quienes deben llevar a cabo las acciones necesarias para registrar a sus precandidatos y, en consecuencia, que estos puedan informar sobre sus ingresos y gastos. Lo anterior se logra mediante el registro de los ciudadanos en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos (SNR), así como en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF).

En ese sentido, sirve de criterio orientador lo señalado por la Sala Regional correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, con sede en Monterrey, del TEPJF, al emitir la sentencia en el expediente identificado con el número SM-JDC-65/2017 y acumulado SM-JDC-66/2017 y determinar lo siguiente:

*“(...) esta Sala advierte que la autoridad da a conocer al aquí actor, que **el partido político que lo postuló estuvo en posibilidad de llevar a cabo las acciones necesarias para registrarlo como precandidato y, en consecuencia, que pudiera informar sobre sus ingresos y gastos vía el SIF. Gastos de propaganda que, además, le mencionó había detectado, como se evidencia del siguiente párrafo extraído del oficio al que nos referimos antes, en el cual se indica textualmente: (...)***

Efectivamente, se tiene que si bien por un lado el partido que lo propone dice que fue candidato único y que no hizo precampaña, también se aprecia de autos que el actor tuvo tal carácter, como lo hace patente la constancia de precandidatura expedida por el Presidente del Consejo Político y por el Presidente del Comité Estatal del Partido Joven, y él mismo reconoce que sí realizó actos de precampaña, en su oficio de respuesta a la autoridad.

*De ese oficio debe destacarse que, en unión al diverso oficio de requerimiento de la autoridad, permiten concluir que no pudo en efecto acceder el SIF, **y ello obedeció a un acto atribuible al partido**, como fue reconocido por la Unidad de Fiscalización, en la medida en que expone que le dio esa opción en el oficio de errores y omisiones y el partido tomó una posición pasiva, **al dejar transcurrir el plazo que le fue dado para pedir la habilitación del precandidato en el SNR y el SIF.***
(...)”

[énfasis añadido]

De lo anterior, se advierte que es obligación del partido político realizar las acciones conducentes para registrar a las y los precandidatos en el SIF y en el SNR para el efecto de rendir sus respectivos informes de ingresos y gastos de precampaña.

Para robustecer lo antes señalado, debemos atender las reglas que establece el Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones, relativo al procedimiento para la operación del SNR, en el cual se establece lo siguiente:

- El partido político es responsable de la operación del Sistema y, entre otras, de las siguientes actividades:

- Administrar al interior de su partido, las cuentas de los usuarios para la operación del multicitado Sistema.
 - Autorizar y crear la cuenta de un responsable del SNR por entidad, en el caso de los Partidos Políticos Nacionales con representación local.
 - Aprobar en el SNR la solicitud de registro de las personas que, de acuerdo con las normas y requisitos establecidos por el instituto político, hayan sido aceptadas como precandidatos.
 - Autorizar en el SNR la solicitud de registro de las personas que de acuerdo con las normas y requisitos establecidos por el partido que representan, hayan sido seleccionadas para postularlas a las candidaturas, ante el Instituto o el Organismo Público Local, según el ámbito de elección.
- El partido deberá capturar las fechas en las que se llevará a cabo el registro de precandidaturas y en las que se realizarán las actividades de precampaña.
- El ciudadano aspirante a ser precandidato deberá entregar ante el órgano facultado del partido, el formulario de registro y el informe de capacidad económica impreso con firma autógrafa generado por el sistema, junto con la documentación adicional que al efecto señale el partido político. El llenado del formulario de registro no otorga **la calidad de precandidata o precandidato, ésta se obtiene hasta el momento en que el partido político determine su procedencia, de conformidad con los requisitos establecidos en su convocatoria.**
- La persona que aspira a la precandidatura por el partido político será la responsable de la veracidad de la información contenida en el formulario de registro, de los datos del informe de capacidad económica, de la aceptación para recibir notificaciones electrónicas y de la firma autógrafa de este formulario de registro, así como de proporcionarlo al partido político en los plazos y cumpliendo los requisitos que el mismo haya establecido.

Al respecto, es preciso señalar que con fundamento en los artículos 267, numeral 2; 270, numeral 1 y 281 del Reglamento de Elecciones, los partidos políticos deben realizar el registro de precandidaturas y candidaturas en el SNR implementado por el propio Instituto, tanto en elecciones federales como locales ya sean ordinarias o extraordinarias, toda vez que constituye un medio que permite unificar los procedimientos de captura de datos.

e) Sistema Integral del Fiscalización.

Los partidos políticos tienen la obligación de registrar en los sistemas de fiscalización a los precandidatos para el efecto de que éstos puedan tener acceso

a los mismos y con ello poder reportar los ingresos y gastos que, en su caso, hayan realizado en el periodo de precampaña. En consecuencia, y atendiendo a lo establecido en la ley, el deber de presentación de los diversos informes es una obligación compartida entre los partidos políticos y los precandidatos, pues por un lado, es deber de los partidos políticos realizar los trámites necesarios para que las personas que adquieran una precandidatura estén en condiciones de informar en tiempo real los ingresos y gastos que tengan con motivo de esa calidad y finalmente presentar ante el partido político correspondiente el informe para que este a su vez, cuente con los insumos necesarios para cumplir con su obligación ante la autoridad fiscalizadora.

Sobre este punto es importante señalar que la obligación de presentar un informe de precampaña de ninguna manera implica la imposición de una carga adicional ni un perjuicio a los sujetos obligados, pues en el caso en que no realizaran ningún gasto, únicamente se deberá presentar el informe correspondiente en ceros. Pues tal como fue señalado con anterioridad, el informe es el instrumento a través del cual los partidos rinden cuentas respecto del origen de sus recursos, así como el destino de su aplicación, y solo a través de su presentación la autoridad puede realizar sus tareas de fiscalización.

Al respecto, el veintiocho de octubre de dos mil veinte, en sesión ordinaria, este Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG518/2020 por el que se determinan las reglas para la contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así como los gastos que se consideran como de apoyo ciudadano y precampaña correspondientes al Proceso Electoral Federal Ordinario y Locales Concurrentes 2020-2021, así como los procesos extraordinarios que se pudieran derivar de dicho proceso.

En la especie, el artículo 18 del citado Acuerdo define los conceptos que se consideran gastos de precampaña. Asimismo, el artículo 27 del Acuerdo en mención dispone que las y los precandidatos deberán presentar los informes de precampaña a través del partido político respectivo, atendiendo a los plazos que al efecto emita el Instituto Nacional Electoral, esto es, existe una responsabilidad compartida entre los y las precandidatas y los partidos políticos, siendo estos los responsables directos ante la Unidad Técnica de Fiscalización los informes correspondientes.

De los razonamientos expuestos anteriormente es posible formular las siguientes conclusiones:

- Los partidos políticos tienen obligación de presentar informes de ingresos y gastos de precampaña.

- Los precandidatos son responsables solidarios del cumplimiento de la obligación de entregar dichos informes.
- La obligación de los partidos políticos de presentar los informes existe con independencia de que se determinen las candidaturas de forma directa, sin importar si es sólo un precandidato, el método electivo, ni el nombre con que se designe al precandidato.
- Los partidos son directamente responsables, en materia de fiscalización, de llevar un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados, por todos y cada uno de los precandidatos participantes en el proceso de selección interna.
- En el supuesto de que no se lleven a cabo actos de precampaña, existe el imperativo de dar aviso de tal situación a la autoridad fiscalizadora, para lo cual es necesario presentar el informe de precampaña respectivo, en todo caso, en ceros.

Ahora bien, una vez analizada la trascendencia de la norma transgredida se procede a analizar y desarrollar el caso en concreto.

B. Caso concreto.

Como ya fue mencionado, la queja que dio origen al procedimiento de mérito traía consigo diversos links de los que se levantó razón y constancias de los hallazgos al momento de ingresar a ellos, razón por la cual esta autoridad tiene certeza de que el Osvaldo Sandoval Quezada aparece refiriendo que se registró como precandidato a Presidente Municipal de Comitán de Domínguez, en la plataforma del partido Morena.

Al respecto, es importante señalar que de la verificación efectuada en el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos no se localizó registro alguno por parte del partido político Morena respecto del ciudadano en comento como precandidato. Aunado a lo anterior, en el Sistema Integral de Fiscalización tampoco se localizaron Informes de ingresos y gastos de Precampaña, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Chiapas, respecto a la persona referida.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/163/2021/CHIS

Paralelo a lo anterior, se procedió a notificar el inicio del procedimiento de mérito y emplazar al partido Morena, así como al C. Osvaldo Sandoval Quezada, sin embargo, el ciudadano fue omiso en dar respuesta al emplazamiento. Por lo que respecta al partido político en comento refirió que el ciudadano denunciado es militante del partido Nueva Alianza Chiapas y que fue candidato de dicho partido. Sin embargo, esta autoridad tiene certeza de una publicación en la que el C. Osvaldo Sandoval Quezada aparece manifestando que se registró como aspirante a candidato en la plataforma del partido Morena, el cual cuenta con edición, aparecen el emblema, los colores y el nombre del partido, y no obstante el partido no presentó el deslinde correspondiente.

Por otro lado, de la concatenación del marco conceptual expuesto en los párrafos anteriores y los hechos acreditados en la integración del procedimiento de mérito, se concluye que el C. Osvaldo Sandoval Quezada, cuyo carácter de conformidad a los hallazgos detectados por esta autoridad electoral fue de aspirante, por lo que puede entender que se **refiere a una precandidatura**, por lo tanto, tenían la obligación presentar su informe de precampaña, lo es así, toda vez que de la documentación que obra en los presentes autos, se acredita que el ciudadano investigado realizó actos cuya finalidad era la de posicionar su imagen ante los simpatizantes o la militancia de Morena, así como el electorado en general.

De esta manera, este Consejo General considera que la hipótesis prevista en los artículos 79, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la Ley General de Partidos Políticos y 445, párrafo 1, inciso d), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, no restringe la obligación de presentar informes de precampaña. Por tanto, es evidente que Morena **tenía la obligación de registrar a sus precandidatos contendientes** a efecto que fueran sujetos a los procedimientos de fiscalización, pues sólo así es posible garantizar, de manera oportuna, la transparencia y conocimiento del manejo de los recursos públicos, asimismo se advierte que dicha obligación se comparte con los precandidatos, pues estos también se encargan de informar en un primer momento al partido político y posteriormente estos a la autoridad fiscalizadora.

En este tenor, no es válido suponer que, por el hecho de no haber sido registrados con la denominación específica de **precandidatos** por el partido político, no tengan la obligación de presentar los informes correspondientes, pues la ley exige su presentación sin hacer distinción alguna.

No pasa desapercibido para esta autoridad, lo señalado por Morena respecto a que no realizaron precampaña para los cargos de elección popular a Diputaciones

Locales y Presidencias Municipales, correspondientes al Proceso Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Chiapas, y, por consiguiente, no se celebraron actos de precampaña; sin embargo, de los elementos de prueba que obran en el expediente se detectaron actos que permiten a este Consejo General arribar a una conclusión distinta.

De lo anterior, para acreditar la existencia de actos de precampaña, lo procedente es analizar si los elementos obtenidos cumplen con todos y cada uno de los elementos siguientes:

a) Un elemento personal: que los realicen los partidos políticos, sus militantes, aspirantes o precandidatos y en el contexto del mensaje se adviertan voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al sujeto de que se trate; ello, puesto que la conducta reprochada es atribuible a todo ciudadano que busca la postulación, porque el bien jurídico que tutela la norma es la equidad en la contienda.

b) Un elemento temporal: que dichos actos o frases se realicen durante el periodo de precampaña.

c) Un elemento subjetivo: En este caso, recientemente la Sala Superior estableció que para su actualización se requiere de manifestaciones explícitas; o bien, unívocas e inequívocas de apoyo o rechazo a una opción electoral; además, estas manifestaciones deben de trascender al conocimiento de la ciudadanía y que, al valorarse en su contexto, puedan afectar la equidad en la contienda electoral.

Lo anterior, en concatenación con lo dispuesto por el artículo 211, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que a la letra establece:

“Artículo 211.



- 1. Para los efectos de este Capítulo, se entenderá por propaganda de precampaña al conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el periodo de precampaña difunden los precandidatos con el propósito de dar a conocer sus propuestas y obtener la candidatura a un cargo de elección popular.***
(...)”

De este modo, es conveniente analizar las publicaciones que dieron origen al presente procedimiento sancionador, las cuales se analizan a continuación:


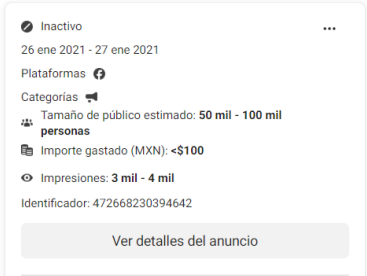
**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/163/2021/CHIS**

Personal	Temporal	Subjetivo
<p>Se acredita, ya que se identifica en la publicación de mérito al C. Osvaldo Sandoval Quezada</p> 	<p>Se acredita, ya que la publicación fue difundida en la red social Facebook el veintiséis de enero de dos mil veintiuno, fecha que se encuentra dentro del periodo de precampaña.</p>	<p>No se acredita, en virtud de que, de la citada publicación no se advierte de manera sistemática y objetiva el posicionamiento del sujeto Osvaldo Sandoval, ya que dicha publicación menciona la frase: <i>“¡Nos vamos a levantar juntos! Es momento de apoyar a nuestros amigos comerciantes comitecos. Osvaldo Sandoval #ConsumeLocalComitán #EchalesLaMano”</i>, de la cual no se desprende el cargo por el que se postuló, el partido político, el proceso, ni ninguna referencia a contender en él, apareciendo en ella únicamente su nombre.</p>
<p>Se acredita, ya que se identifica en la publicación de mérito al C. Osvaldo Sandoval Quezada.</p> 	<p>Se acredita, la publicación fue difundida en la red social Facebook el veintiséis de enero de dos mil veintiuno, fecha que se encuentra dentro del periodo de precampaña.</p>	<p>No se acredita, en virtud de que, de la citada publicación no se advierte de manera sistemática y objetiva el posicionamiento del sujeto Osvaldo Sandoval, ya que en dicha publicación menciona la frase <i>“Quiero ver a Comitán seguro para mi hija Ximena y mi esposa Marisu, para mi madre, mi abuela, mi hermana, para todas las familias comitecas ¡Juntos lo haremos Posible! #Sigueme”</i> de la cual no se desprende el cargo por el que se postuló, el partido político, el</p>

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/163/2021/CHIS

Personal	Temporal	Subjetivo
		<p>proceso, ni ninguna referencia a contender en él, apareciendo en ella únicamente su nombre.</p>
<p>No se acredita, ya que se identifica que la publicación de mérito corresponde al C. Osvaldo Sandoval Quezada, sin embargo, no contiene su nombre, imagen, cargo por el que se postuló, ni partido político.</p> 	<p>Se acredita, la publicación fue difundida en la red social Facebook los días veintiséis y veintisiete de enero de dos mil veintiuno, fecha que se encuentra dentro del periodo de precampaña.</p>	<p>No se acredita, en virtud de que, de la citada publicación no se advierte de manera sistemática y objetiva el posicionamiento del sujeto Osvaldo Sandoval, ya que en dicha publicación menciona la frase <i>“Recuperemos la grandeza de nuestra ciudad. ¡Juntos es posible!- Osvaldo Sandoval-”</i> de la cual no se desprende el cargo por el que se postuló, el partido político, el proceso, ni ninguna referencia a contender en él, apareciendo en ella únicamente su nombre.</p>

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/163/2021/CHIS

Personal	Temporal	Subjetivo
<p>Oswaldo Sandoval Publicidad · Pagado por Oswaldo Sandoval</p> <p>Recuperemos la grandeza de nuestra ciudad. ¡Juntos es posible! 🇲🇽</p> <p>-Oswaldo Sandoval-</p> <p>Foto: ADV Medios Visuales</p> 		
<p>Se acredita, ya que se identifica en la publicación de mérito al C. Oswaldo Sandoval Quezada.</p> 	<p>Se acredita, la publicación fue difundida en la red social Facebook y veintisiete de enero de dos mil veintiuno, fecha que se encuentra dentro del periodo de precampaña.</p>	<p>No se acredita, en virtud de que, de la citada publicación no se advierte de manera sistemática y objetiva el posicionamiento del sujeto Oswaldo Sandoval, ya que dicha publicación contiene la frase <i>“Anhelo para mi familia un Comitán seguro, un Comitán en paz, con sus calles transitables, con sus barrios iluminados, con su gente teniendo oportunidades de trabajo. Anhelo para todos un gobierno que de verdad trabaje, donde se escuche nuestra voz, nuestras necesidades y exigencias”</i>, de la cual no se desprende el cargo por el que se postuló, el partido político, el proceso, ni ninguna referencia a contender en</p>

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/163/2021/CHIS

Personal	Temporal	Subjetivo
		<p>él, apareciendo en ella únicamente su nombre.</p>
<p>Se acredita, ya que se identifica en el video de mérito al C. Osvaldo Sandoval Quezada, posicionando su imagen, su nombre, haciendo referencia al cargo por el que se postuló y el nombre del partido político.</p>	<p>Se acredita, la publicación fue difundida en la red social Facebook el once y doce de febrero de dos mil veintiuno, fecha que no se encuentra dentro del periodo de precampaña, pero al haber sido en el periodo de selección interna del partido político, periodo en el que Morena eligió a sus precandidatos, razón por la cual se considera como parte de la precampaña.</p>	<p>Se acredita, en virtud de que, de la citada publicación se advierte de manera sistemática y objetiva el posicionamiento del sujeto Osvaldo Sandoval, ya que en dicha publicación se encuentra el siguiente texto: <i>"Amigas y amigos, quiero informales que me registré como aspirante a candidato de la Presidencia Municipal de #Comitán por Morena. ..."</i> así como de dicho video menciona lo siguiente <i>"...hoy me dirijo a toda la sociedad comiteca para informarles que en días pasados estando en tiempo y forma me registré como aspirante a candidato a la Presidencia Municipal de Comitán, ya que coincido con los ideales de nuestro señor Presidente la Republicade ver transformado a México..."</i>, mencionando</p>

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/163/2021/CHIS

Personal	Temporal	Subjetivo
<div> <div> <div>Inactivo</div> <div>11 feb 2021 - 12 feb 2021</div> <div>Plataformas</div> <div>Categorías</div> <div>Tamaño de público estimado: 50 mil - 100 mil personas</div> <div>Importe gastado (MXN): <\$100</div> <div>Impresiones: 3 mil - 4 mil</div> <div>Identificador: 3672537359462235</div> <div>Ver detalles del anuncio</div> </div> <div> <div> <div> <div> <div>Osvaldo Sandoval</div> <div>Publicidad • Pagado por Osvaldo Sandoval</div> </div> <div> <div> <div>Amigas y amigos, quiero informarles que me registré como aspirante a candidato a la Presidencia Municipal de #Comitán por MORENA.</div> <div>Llevamos más de dos años de trabajo ininterrumpidos, caminado casa por casa, visitando barrios, colonias, ejidos, comunidades, escuchando y apoyando directamente a la...</div> <div> <div> <div> <div>OSVALDO SANDOVAL</div> <div>ME REGISTRE COMO ASPIRANTE A CANDIDATO PARA PRESIDENTE MUNICIPAL DE COMITÁN POR MORENA</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div></div></div>		<p>así su nombre, el cargo por el que se postuló como candidato a la Presidencia Municipal, el nombre partido político, invitando a toda la ciudadanía, simpatizantes, militantes, amigos líderes de diferentes barrios y ejidos que le den la confianza de servirles, es decir llamando al voto.</p>

Es preciso mencionar que, que los hallazgos obtenidos durante la sustanciación del procedimiento de mérito los cuales fueron certificados por la Oficialía Electoral de este Instituto, se consideran una documental pública, tomando en consideración su propia y especial naturaleza, detentan valor **probatorio pleno**, toda vez que fueron emitidas por autoridad en ejercicio de sus facultes. Lo anterior de conformidad con los artículos 16, numeral 1, fracción I; 20, numerales 1 y 4, así como 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos.

Por lo anterior, del análisis a las imágenes de las publicaciones materia de este procedimiento, que se encuentran en el cuadro que antecede, se advierte que una de las publicaciones (última fila) contiene todos los elementos para acreditarse

como acto de precampaña, toda vez que el ciudadano incoado, llevó a cabo actos que evidencian una manifestación directa respecto a su interés en participar en el Proceso Electoral Local Ordinario del estado de Chiapas 2020-2021, esto es, se advierte una conducta o su relación para alcanzar una finalidad determinada, en el caso en concreto la postulación a cargo de elección popular por el partido Morena.

Así, una vez que se han analizado los elementos obtenidos durante la sustanciación del procedimiento que por esta vía se resuelve, en el marco de los elementos mínimos que se deben considerar para precisar que un acto es de precampaña, es importante definir si en la especie se acredita la existencia de propaganda de precampaña, entendida como aquella cuyo objetivo **es que el postulante consiga el apoyo hacia el interior del partido político, para de esta manera convertirse en su candidato, por lo que no debe hacer llamados al voto y su discurso estar dirigido justamente a los militantes o simpatizantes del instituto político en cuyo proceso de selección interno participa.** ⁵

Asimismo, es importante mencionar que los hallazgos de esta autoridad se verificaron durante los periodos establecidos por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Chiapas, para el desarrollo de las precampañas, de conformidad con el calendario siguiente:

- 22 de enero de 2021 - Inicio de precampaña de Diputaciones y Ayuntamientos.
- 31 de enero de 2021 - Fin de precampaña de Diputaciones y Ayuntamientos.

En este sentido, de los hallazgos detectados y analizados en párrafos anteriores, se advierte que la conducta desplegada por la persona incoada, sí cumple con el elemento de temporalidad pues, las publicaciones fueron realizadas los días ocho y nueve de febrero de dos mil veintiuno, que fue durante el periodo de precampaña, cumpliéndose así el elemento de temporalidad, pues su finalidad fue precisamente conseguir el apoyo hacia el interior del partido político, para que de esta manera pudiera convertirse en su candidato.

Por lo anterior, han quedado acreditadas las realizaciones de actos de precampaña, que en el supuesto de que se hubiera requerido el flujo de recursos para su realización, si un precandidato realiza una erogación que se considere gasto de precampaña, deberá reportarlo en el informe de precampaña correspondiente,

⁵ Criterio sostenido en la Jurisprudencia 2/2016, de rubro: ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA. LOS CONSTITUYE LA PROPAGANDA DIFUNDIDA DURANTE PRECAMPAÑA CUANDO NO ESTÁ DIRIGIDA A LOS MILITANTES (LEGISLACIÓN DE COLIMA)

situación que en el caso que nos ocupa no ocurrió, pues al no encontrarse registrados en el SNR, no se generó ninguna cuenta de ingreso al Sistema de Contabilidad en Línea y, en consecuencia, el precandidato estaba impedido para realizar reporte alguno en el SIF.

Por otra parte, es relevante señalar, que Morena no objetó ni impidió por ningún medio público la realización de actos de posicionamiento de los precandidatos, por lo tanto, el propio partido permitió la realización de manifestaciones y gastos, por parte de los aspirantes.

De conformidad con lo señalado en las líneas que anteceden, se concluye que el C. Osvaldo Sandoval Quezada, sí tuvo el carácter de precandidato a Presidente Municipal de Comitán de Domínguez, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Chiapas; por lo tanto, tenían la obligación en materia de fiscalización de entregar su informe de gastos de precampaña.

En el caso concreto, es importante reiterar que la Sala Superior ha señalado que las personas que pretendan ser postuladas por un partido político como candidata o candidato a un cargo de elección popular, deben ser consideradas como precandidaturas, con independencia de que obtuvieran, del órgano partidista facultado para ello, algún tipo de registro con la denominación de precandidatura; en ese sentido, para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de fiscalización, resulta irrelevante si se les denomina expresamente como precandidaturas, **aspirantes** o participantes.

En ese contexto, la no presentación de los informes de precampaña vulnera la certeza y la transparencia en la rendición de cuentas, toda vez que impide la fiscalización de los recursos que fueron utilizados por los partidos políticos y por los precandidatos en la competencia a un cargo de elección popular.

Ahora bien, es importante hacer énfasis en que, tanto el partido como los precandidatos eran responsables de la presentación de sus informes respectivos, reconocieron conocer que eran sabedores de su obligación de rendir cuentas, tener la calidad con la que se ostentaron y haber realizado actividades de precampaña, consecuentemente resulta insostenible que desconozcan sus obligaciones y eso les exima de su cumplimiento.

En este sentido, el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente las personas aspirantes, las precandidaturas y candidaturas,

como lo precisó la autoridad fiscalizadora, son responsables solidarias respecto de la conducta en análisis.⁶

No pasa desapercibido por esta autoridad electoral, tal como se dijo en líneas anteriores, el partido político Morena mencionó que no realizó precampañas en ningún cargo de elección popular que se haya disputado en el pasado Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Chiapas; sin embargo, de los hallazgos obtenidos por esta autoridad, se tiene certeza que los ciudadanos incoados realizaron actos que contienen todos los elementos necesarios para considerarse actos de precampaña.

Derivado de lo anterior, ha quedado acreditada la realización de actos de precampaña, que necesariamente implicaron el flujo de recursos para su realización, por lo que como se ha señalado previamente, si los precandidatos realizaron una erogación que se considere gasto de precampaña, debieron reportarlo en el informe de precampaña correspondiente, situación que en el caso que nos ocupa no ocurrió.

Visto lo anterior y una vez valoradas las pruebas en conjunto respecto de los hechos materia del procedimiento, es viable concluir fácticamente lo siguiente:

- El ciudadano Osvaldo Sandoval Quezada realizó acciones tendentes a posicionar su imagen ante el electorado para ser postulado como precandidato.
- El ciudadano Osvaldo Sandoval Quezada participó para postularse al cargo de elección popular a Presidencia Municipal en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Chiapas, con carácter de precandidato; por lo que **tenía la obligación de presentar su informe de precampaña.**

Por lo anteriormente expuesto, se concluye que el partido **Morena**, omitió presentar el informe de precampaña relativo al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Chiapas, siguientes:

⁶ Criterio sostenido en las sentencias de los medios de impugnación SUP-RAP-74/2021, SUP-JDC-424/2021 y SUP-JDC-425/2021, Y ACUMULADOS.

ID	Ciudadano	Cargo
1	Osvaldo Sandoval Quezada	Presidencia Municipal

En consecuencia, de las consideraciones fácticas y normativas expuestas, esta autoridad electoral concluye que existen elementos que configuran una conducta infractora de lo establecido en los preceptos 79, numeral 1, inciso a), fracciones I, II y III de Ley General de Partidos Políticos; y 223, numeral 6, inciso a), del Reglamento de Fiscalización, por lo que el procedimiento de mérito debe declararse **fundado** respecto de los hechos analizados en el presente apartado.

C. Responsabilidad de los sujetos incoados.

Acreditada la conducta materia de análisis, es importante, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados, previo a la individualización de las sanciones correspondientes.

Primeramente, esta autoridad debe pronunciarse respecto de la cadena de corresponsabilidad que tienen los precandidatos y el partido político con la obligación de presentar los informes de gastos correspondientes en el periodo de precampaña.

De la lectura a lo establecido en el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracciones I y II de la Ley General de Partidos Políticos, se desprende lo siguiente:

“Artículo 79.

1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes:

a) Informes de precampaña:

I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como los gastos realizados;

II. Los candidatos y precandidatos son responsables solidarios del cumplimiento de los informes de campaña y precampaña. Para tales efectos, se analizará de manera separada las infracciones en que incurran;”

Podemos advertir que las personas candidatas y personas precandidatas son responsables solidarias del cumplimiento de los informes de campaña y precampaña, pues deben presentar ante el partido sus respectivos informes.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y las personas precandidatas, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral-registro contable en línea-de resolver de manera expedita, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b), refiere que éstos se sujetarán a *“las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, precandidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”*

Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS” de la legislación en comento, con relación al Libro Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes siguientes:

- 1) Informes del gasto ordinario:
 - a) Informes trimestrales.
 - b) Informe anual.
 - c) Informes mensuales.
- 2) Informes de Proceso Electoral:
 - a) Informes de precampaña.**
 - b) Informes de obtención de apoyo ciudadano.
 - c) Informes de campaña.
- 3) Informes presupuestales:
 - a) Programa Anual de Trabajo.
 - b) Informe de Avance Físico-Financiero.
 - c) Informe de Situación Presupuestal.

De lo anterior se desprende que, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; sino que ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el precandidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que, respecto a las precampañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de las y los precandidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda interna.
- Que las y los precandidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de precampaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente las y los precandidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los precandidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, los precandidatos están obligados a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se trate.

Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos y las personas precandidatas, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad en materia de fiscalización, ante las responsabilidades compartidas entre partido y precandidatos, a determinar al sujeto responsable, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.

Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que, en materia de presentación de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos y precandidatos a continuación, se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/163/2021/CHIS

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los precandidatos obligados solidarios.

El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de cada uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente, está a cargo de los partidos políticos; cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado.

Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de Fiscalización, establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de ingresos y gastos de precampaña y de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los precandidatos, lo anterior ya que estos deben presentar en un primer momento su informe de ingresos y gastos ante el partido político, para que éste tenga la información y documentación idónea para cumplir con su obligación ante la autoridad fiscalizadora.

En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que, de actualizarse dicho supuesto, se aplicaría la responsabilidad solidaria para las personas precandidatas.

En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los precandidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los precandidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les corresponde.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del TEPJF, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2015 y SUP-RAP-159/2015 acumulados, al determinar lo siguiente:

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.

Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregarla documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.

Al respecto, mutatis mutandis, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual

resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación⁷:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE. - De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del TEPJF, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015 y SUP-RAP-159/2015 acumulados, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del partido no fue la idónea, pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de la irregularidad observada, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al partido político de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por

⁷ El contenido de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales interpretados en esta jurisprudencia, corresponden a los artículos 25, párrafo 1 y 55, párrafo 2, de la Ley General de Partidos Políticos; y 442, párrafo 1, incisos d) e i), 443, párrafo 1, inciso a), 447, párrafo, inciso b), y 452, párrafo, inciso b), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Ahora bien, por lo que hace a la responsabilidad de las personas precandidatas, deben acreditar el cumplimiento de su obligación consistente en presentar el informe respectivo ante el órgano interno del partido por el que pretenden ser postulados, de conformidad con el artículo 229, numeral 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que en caso de que esto se acredite, la responsabilidad únicamente sería atribuible al partido político y no a las personas que pretenden obtener una precandidatura.

Lo anterior, ha sido un criterio sostenido por el TEPJF con la emisión de la tesis LIX/2015, cuyo rubro y contenido es el siguiente:

“Tesis LIX/2015

INFORMES DE PRECAMPAÑA. SU PRESENTACIÓN EN TIEMPO Y FORMA ANTE EL PARTIDO EXCLUYE DE RESPONSABILIDAD A PRECANDIDATAS Y PRECANDIDATOS.- De la interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 79, párrafo 1, inciso a), fracciones I a III, de la Ley General de Partidos Políticos; 229, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 235, 238, 239, 240 y 242 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, se desprende el deber de los institutos políticos de presentar informes de precampaña de los ingresos y gastos de cada uno de sus precandidatas y precandidatos a cargos de elección popular, así como su responsabilidad solidaria en el cumplimiento de esa obligación. En este orden de ideas, cuando se acredita que éstos últimos presentaron en tiempo y forma el informe de gastos de precampaña correspondiente, ante el órgano competente del partido político en el cual militan, no obstante ello, éste omite presentarlo ante la autoridad fiscalizadora mediante el sistema de contabilidad en línea, o bien, lo hace de manera extemporánea, la infracción a las normas que regulan dicha obligación, es atribuible sólo al partido político y no a quien ostenta una precandidatura, al actualizarse una excluyente de responsabilidad para tales personas obligadas, al ser producto de una omisión imputable exclusivamente al instituto político.”

Lo cual en el caso concreto no aconteció, esto es, las personas incoadas de las que ha quedado acreditado que realizaron actos de precampaña y de las cuales Morena omitió presentar sus informes de gastos de precampaña, al ser emplazados en el procedimiento de mérito no presentaron evidencia alguna en la que se advierta que cumplieron con su obligación de presentar ante el órgano partidista correspondiente el informe de gastos relacionados con la propaganda electoral detectada.

Esto es así, porque como lo ha sostenido la Sala Superior en los al resolver los expedientes SUP-JDC-416/2021 Y ACUMULADOS y SUP-RAP-74/2021, SUP-JDC-424/2021 Y SUP-JDC-425/2021, ACUMULADOS, con base en el marco jurídico descrito se advierte, cuando menos, que existen tres hipótesis de irregularidades claramente diferenciables:

- i) Cuando el partido y el precandidato no cumplen sus respectivos deberes;
- ii) Cuando el precandidato no cumple su deber, pero el partido sí cumple el que le corresponde, y
- iii) Cuando el precandidato sí cumple su deber, pero el partido o coalición no cumple la que le corresponde.

Con base en lo anterior, la Sala Superior ha considerado que:

“La responsabilidad solidaria a que se refiere el sistema electoral mexicano no guarda similitud con la responsabilidad solidaria prevista en el derecho civil, al abordar, por ejemplo, las obligaciones que derivan de los actos ilícitos; o de carácter laboral o seguridad social; o, incluso de índole fiscal; en las que se puede apreciar, como rasgo común, que los obligados serán solidariamente responsables por los daños o prestaciones reclamadas, de modo que, bajo la aparente aplicabilidad de los conceptos del derecho civil, pudiera erróneamente considerarse suficiente la atribución de responsabilidad a los partidos políticos por las irregularidades detectadas con motivo de la revisión de los informes de campaña, eximiendo a los candidatos de cualquier responsabilidad o sanción”.⁸

En tales condiciones mientras que en materia civil, el alcance de los obligados solidarios está concebido en el concepto de mancomunidad, la pluralidad de deudores y de exigir solo a uno de éstos el cumplimiento total de la obligación, a pesar de la existencia de una obligación mancomunada; esto no puede ser así en materia electoral, pues del marco normativo se desprende que en cada caso debe valorarse el grado de responsabilidad del precandidato y del partido político en la conducta omisiva para determinar si la responsabilidad solidaria da lugar a la imposición de sanciones a sólo uno de ellos o a ambos obligados solidarios.

Esto es, en cada caso debe valorarse el grado de responsabilidad de la persona precandidata y del partido político en la conducta omisiva para determinar si la

⁸ Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el juicio para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos SUP-JDC-623/2021

responsabilidad solidaria da lugar a que a cada uno de los sujetos investigados se le imponga una sanción o sólo a algunos de ellos.

Por lo que se refiere a las sanciones de los precandidatos y candidatos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley General de Partidos Políticos, su responsabilidad implica la observancia de determinadas obligaciones, consistentes principalmente en entregar a su partido político la documentación para acreditar los gastos durante esa etapa inicial; de tal forma que el deber de rendir los informes correspondientes ante la autoridad fiscalizadora corresponde a los partidos políticos.

En ese sentido, los precandidatos son responsables solamente del incumplimiento de su propio deber, por lo que la norma aplicable exige que las infracciones en que incurran sean analizadas de manera separada respecto de los partidos políticos.

Aunado a ello, la propia normativa dispone que la responsabilidad de los precandidatos y candidatos sea analizada de forma separada a la responsabilidad de los partidos políticos que los postulan, pues cada uno debe responder por las obligaciones específicas.

Asimismo, al ser conductas diferentes, tampoco se puede decir que las sanciones que se impongan necesariamente deben ser similares, toda vez que, como se ha constatado, el legislador dispuso que la conducta de los partidos políticos y de los precandidatos sea revisada de forma independiente y sancionada de acuerdo con las particularidades de cada uno de ellos.

Esto es así, porque el legislador dispuso que cada uno de estos sujetos (precandidatos por un lado y partidos políticos por el otro) tiene deberes distintos, de tal forma que su incumplimiento conlleva únicamente a la responsabilidad, en lo individual, del sujeto responsable, sin que sea dable sancionar a un sujeto distinto y sin que se pueda afirmar que la sanción a uno de ellos excluye la responsabilidad del otro. En otras palabras, consentir lo anterior implicaría atribuir automáticamente una responsabilidad a quién no le corresponde o eximirlo de una que sí le es atribuible.

En ese contexto, la Sala Superior ha razonado que la calificación de las faltas tomando en cuenta las agravantes y atenuantes no puede realizarse de forma arbitraria o caprichosa, sino que debe contener los acontecimientos particulares que

en cada supuesto de comisión u omisión específico suceden, así como los razonamientos lógicos, motivos y fundamentos en los que se sustenta.⁹

Es relevante no perder de vista que la omisión impidió que se desplegaran las facultades de fiscalización, así como que se ordenaran procedimiento o la ejecución de diversos mecanismos para el control y vigilancia del origen, monto, destino y aplicación de los recursos con que cuenten los partidos políticos, por lo que los precandidatos y el partido violaron la certeza y la transparencia en el origen y destino de los recursos, pues impidieron conocer si se ajustaron a las disposiciones en materia de financiamiento y, en su caso, las violaciones que hubieran cometido, con lo que imposibilitó que se dotara al Proceso Electoral de legalidad, legitimidad y equidad en la contienda, valores fundamentales del estado constitucional democrático.

Por lo anteriormente señalado, este órgano fiscalizador concluye que es imputable la responsabilidad de la conducta infractora de mérito, tanto al **partido político Morena como el ciudadano Osvaldo Sandoval Quezada, pues no presentaron el informe de precampaña correspondiente en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Chiapas**, como lo establece la normatividad electoral.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a las individualizaciones de las sanciones correspondientes.

D. Capacidad económica

Morena

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad electoral para la individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, las condiciones socioeconómicas del ente infractor.

Ahora bien, debe considerarse que los partidos políticos sujetos al procedimiento de fiscalización cuentan con capacidad económica suficiente para cumplir con la

⁹ Criterio sostenido al resolver el SUP-RAP-016/2001

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/163/2021/CHIS

sanción que, en su caso, se les imponga, toda vez que, mediante Acuerdo IEPC/CG-A/007/2022, emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del estado de Chiapas, se les asignó un financiamiento público para actividades ordinarias en el ejercicio 2022.

El monto otorgado al sujeto incoado es el siguiente:

Partido Político	Financiamiento público actividades ordinarias 2022
Morena	\$30,196,665.28

En este tenor, es oportuno mencionar que el citado instituto político está legal y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus actividades.

Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para valorar la capacidad económica de los sujetos infractores es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones a la normatividad electoral.

Esto es así, ya que las condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de manera estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

En este sentido, es importante mencionar que el partido Morena cuenta con saldos pendientes por pagar, relativos a sanciones impuestas en diversos procedimientos administrativos sancionadores, conforme a lo que a continuación se indica:

ID	Partido Político	Resolución de la Autoridad	Monto total de la sanción	Montos de deducciones realizadas al mes de septiembre de 2022	Montos por saldar
1	Morena	INE/CG1331/2021	\$7,825,552.33	\$6,767,822.45	\$1,057,729.88
		INE/CG252/2022	\$70,212.40	\$0.00	\$70,212.40

Nota: los saldos que se muestran solamente reflejan movimientos al mes de septiembre de 2022.

Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza que el partido Morena tienen la capacidad económica suficiente con la cual puedan hacer frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran imponérseles en la presente Resolución.

Cabe señalar que, la ejecución de las sanciones que en su caso se impongan **al partido político que recibió financiamiento público estatal**, se realizará por la autoridad electoral local.

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza que el partido político con financiamiento local cuenta con la capacidad económica suficiente para poder hacer frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran imponérseles en la presente Resolución.

Capacidad económica

Respecto de la capacidad económica de la persona denunciada, el artículo 223 bis, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades financieras, bancarias y fiscales.

De este modo, con la finalidad de recabar la información necesaria para comprobar la capacidad económica del sujeto infractor esta autoridad, mediante oficio INE/UTF/DRN/447/2022 solicitó a la Dirección de Análisis Operacional y Administración de Riesgo, que por su conducto solicitara a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores proporcionara los estados de cuenta de las cuentas bancarias a nombre del C. Osvaldo Sandoval Quezada, correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo del año dos mil veintidós.

En este sentido, mediante el oficio 214-4/14581759/2022, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió los estados de cuenta de los meses de marzo, abril y mayo del año dos mil veintidós, de las cuentas bancarias a nombre del C. Osvaldo Sandoval Quezada.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/163/2021/CHIS

De la información recibida por la autoridad financiera, se advirtió lo siguiente:

No.	Institución Bancaria	Marzo	Abril	Mayo
1	BBVA Bancomer S.A.	\$40,032.06	\$26,722.04	\$15,987.97
Total Mensual:		\$40,032.06	\$26,722.04	\$15,987.97

Ahora bien, para obtener el saldo promedio del C. Osvaldo Sandoval Quezada, se realizó la sumatoria del *Total Mensual* de cada mes, dividido entre los 3 meses considerados, a continuación se inserta un cuadro para mayor claridad:

Suma del Total Mensual (marzo a mayo 2022) (A)	Saldo promedio final $A/3=(B)$
\$82,742.07	\$27,580.69

Sujeto Obligado	Saldo promedio final (B)	Capacidad Económica (\$0.00 a \$100,000.00= Amonestación Pública)
Osvaldo Sandoval Quezada	\$27,580.69	Amonestación Pública

Así que la obligación de atender a la situación económica del infractor se sustenta en que la afectación producida con la imposición de una sanción pecuniaria depende del estado patrimonial del responsable.

Cabe precisar que el Servicio de Administración Tributaria informó que no se cuenta con declaración anual 2021 del sujeto incoado.

En términos de lo establecido en el artículo 16, numeral 1, fracción I del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, los documentos presentados por el Servicio de Administración Tributaria y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores son pruebas documentales públicas que tienen pleno valor probatorio.

En esta tesitura, la autoridad electoral cuenta con evidencia suficiente que permite determinar que el sujeto infractor no cuenta con los recursos económicos suficientes para hacer frente a la imposición de sanciones de carácter pecuniario.

3.4 Individualización y determinación de la sanción, respecto de la omisión de presentar el Informe de Precampaña

Una vez acreditada la comisión de la conducta ilícita determinada en el Considerando **2.4, apartado B** de la presente Resolución, violatoria de los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracciones I, II y III de Ley General de Partidos Políticos; y 223, numeral 6, inciso a) del Reglamento de Fiscalización, se procede a individualizar la sanción correspondiente, atento a las particularidades que en el caso se presentan.

Individualización de la sanción respecto de la omisión de presentar el Informe de ingresos y egresos de precampaña.

Una vez acreditada la comisión de la conducta ilícita determinada en el Considerando 3 de la presente Resolución, violatoria del artículo 79, numeral 1, inciso a), fracciones I y III de la Ley General de Partidos Políticos se procede a individualizar la sanción correspondiente, atento a las particularidades que en el caso se presentan.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior del TEPJF dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar las faltas determinando lo siguiente:

- a)** Tipo de infracción (acción u omisión).
- b)** Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
- c)** Comisión intencional o culposa de la falta.
- d)** La trascendencia de las normas transgredidas.
- e)** Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f)** La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g)** La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.

En consideración a lo desarrollado en los párrafos que anteceden, por cuestión de metodología se analizará la infracción en la que incurrieron cada uno de los sujetos obligados atendiendo las características especiales de cada uno de ellos, para el partido político Morena el apartado **A)**, y por lo que hace al precandidato, el C. Osvaldo Sandoval Quezada, en el apartado **B)**.

A. Imposición de la sanción al partido Morena

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).

En relación con la irregularidad acreditada, mismas que corresponde a una **omisión**¹⁰ de presentar el informe de precampaña, atentando a lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracciones I y III, de la Ley General de Partidos Políticos.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.

El partido político omitió presentar **un informe** del periodo de precampaña, atentando a lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracciones I y III de la Ley General de Partidos Políticos.

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la revisión de los Informes de Precampaña de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Chiapas.

Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Chiapas.

¹⁰ Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por la omisión de presentar el informe de precampaña, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

Así las cosas, las faltas sustanciales de mérito traen consigo la no rendición de cuentas, impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).

En las conclusiones que se analizan, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracciones I y III de la Ley General de Partidos Políticos¹¹.

Del artículo señalado se desprende que los partidos políticos tienen la obligación de presentar en tiempo ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de precampaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen

¹¹ Artículo 79. 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes: a) Informes de precampaña: (...) I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como los gastos realizados; III. Los informes deberán presentarse a más tardar dentro de los diez días siguientes al de la conclusión de las precampañas;

sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

La finalidad es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia del artículo referido vulnera directamente el principio de legalidad, por lo cual, en el cumplimiento de esa disposición subyace ese único valor común.

Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevara cabo sus actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los sujetos a fiscalizar, es el rendir cuentas ante la autoridad de manera transparente, inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

Por tanto, se trata de normatividad que protege un bien jurídico de un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los sujetos obligados son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir

a la integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que se cometan en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.

En este tenor de ideas, esta autoridad reitera que el régimen relativo a la presentación de informes de precampaña para los diversos cargos de elección popular establece obligaciones diferenciadas para los precandidatos y partidos políticos. En esta tesitura, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización sino también lo son de manera solidaria todos los precandidatos. De esta forma, por lo que se refiere a las precampañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de sus precandidatos.

Asimismo, respecto de la obligación en la entrega de informes de ingresos y gastos que deben presentar ante este Instituto Nacional Electoral, el orden normativo electoral impone obligaciones específicas con el fin de cumplir con dicho objetivo. Así, existe una responsabilidad solidaria entre partidos políticos y precandidatos cuyo efecto se traduce en una determinación de responsabilidad correlativa con las obligaciones específicas a que cada sujeto se encuentra constreñido.

Es importante señalar que una de las funciones de esta autoridad fiscalizadora es realizar actividades preventivas, con el objeto de garantizar la certeza y transparencia en el manejo de recursos; así como garantizar el principio de legalidad en la actuación de los sujetos obligados. La aplicación efectiva de las normas en materia de fiscalización radica en buena medida en el diseño de las mismas a la luz de los bienes jurídicos que pretenden tutelar, por lo que el partido político, al ser omiso en presentar el Informe de Precampaña, del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Yucatán, vulnera y obstruye el desarrollo de esta actividad, así como la debida rendición de cuentas.

En consecuencia, al no tener certeza sobre el origen, monto, destino y aplicación de los recursos, se vulnera de manera directa los principios de fiscalización que los sujetos están obligados a cumplir.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de la hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracciones I y III de la Ley General de Partidos Políticos, normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues las mismas faltas que generan un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad es el de garantizar la certeza y transparencia en la rendición de cuentas con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines, mismo que fue infringido por las conductas señaladas.

En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al sujeto obligado se traducen en una **falta** de resultado que ocasionan un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al realizar una valoración en conjunto de este elemento con los demás aspectos que se analizan en este apartado, se agrava el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los entes obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió irregularidades que se traducen en una misma conducta y, por tanto, en una misma falta de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, que vulneran el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (reincidencia).

Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de las conductas materia de estudio.

Calificación de la falta

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que la infracción debe calificarse como **GRAVE ESPECIAL**¹².

A) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.¹³

¹² De conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-623/2021 Y ACUMULADOS, en el cual estableció lo siguiente:

“Ante estas precisiones, cuando un partido no registra un precandidato, pero éste realiza actos de precampaña y ambos omiten presentar el informe correspondiente, el grado de culpabilidad es distinto en la medida en que:

1) El precandidato omitió hacer la acción exigida e incumplió con un deber en su actuar (presentar el informe/omisión simple); y,

2) El partido político no evitó, a través de un deber de vigilancia, esa omisión (comisión por omisión, culpa in vigilando). En el caso en concreto, esta Sala Superior considera que la calificación de la falta como culpable que le impuso el Consejo General del INE a MORENA y la respectiva reducción de ministraciones, no es incongruente en comparación con la que calificó a la del precandidato y su respectiva sanción, esto es, dolosa y con la pérdida del derecho a ser registrado.”

¹³ Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el presente considerando, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ESPECIAL**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió presentar 2 informes de precampaña.
- Que respecto a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar** de la conducta objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A) **CALIFICACIÓN DE LA FALTA**, del presente considerando en el cual se expuso el incumplimiento de la obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de revisión.
- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.

- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, el requerimiento electrónico emitido por la autoridad, y el plazo de revisión del informe de precampaña del Proceso Electoral correspondiente.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.
- Que hay culpa en el actuar del sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General del Instituciones y Procedimientos Electorales.¹⁴

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III del artículo en comento, consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Por los argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que la sanción a imponerse a **Morena** debe ser en razón **de la trascendencia de las normas trasgredidas al omitir presentar un informe de precampaña**, lo cual ya ha sido analizado en el apartado correspondiente de esta Resolución, por lo que procede sancionar al partido político, con una sanción económica

¹⁴ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/163/2021/CHIS

equivalente al **100% (cien por ciento)** respecto del **30% (treinta por ciento)** sobre el tope máximo de gastos de precampaña establecido por la autoridad para los procesos de selección de precandidato al cargo de Presidencia Municipal de Comitán de Domínguez, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Chiapas, lo cual asciende a un total de **\$155,459.08 (ciento cincuenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 08/100 M.N.)**.

Derivado de lo anterior, se obtienen las cifras siguientes:

Nombre	Cargo	Entidad/ Municipio	Tope de Gastos de Precampaña	SANCIÓN 30% sobre el Tope de Gasto de Precampaña (A)	Partido con Financiamiento Público Ordinario 2021 más alto Morena	Financiamiento del partido Morena	Porcentaje de sanción (B)	Monto a sancionar C=(A)*(B)
Osvaldo Sandoval Quezada	Presidencia Municipal	Chiapas	\$518,196.94	\$155,459.08	\$52,701,675.93	\$52,701,675.93	100%	\$155,459.08
							Total	\$155,459.08

Asimismo, es preciso referir que el criterio de sanción para **Morena** se fundamenta en lo aprobado por la Comisión de Fiscalización en su sesión extraordinaria del seis de abril del dos mil quince, en el que definen los criterios de proporcionalidad con los que se sancionara a cada instituto político derivado del financiamiento ordinario que perciben.

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al partido político **Morena**, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1, del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$155,459.08 (ciento cincuenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 08/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

B. Imposición de la Sanción al C. Osvaldo Sandoval Quezada

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).

En relación con la irregularidad acreditada, corresponde a una **omisión**¹⁵ de presentar el informe de precampaña, atentando a lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos y 223, numeral 6, inciso a) del Reglamento de Fiscalización.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.

Modo: El ciudadano Osvaldo Sandoval Quezada omitió presentar **el informe** del periodo de precampaña, atentando a lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos y 223, numeral 6, inciso a) del Reglamento de Fiscalización.

Tiempo: La irregularidad atribuida al ciudadano incoado, surgió dentro de la revisión de los Informes de Precampaña de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Chiapas.

Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Chiapas.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

¹⁵ Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Acorde con la conducta que se analiza, el precandidato en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos y 223, numeral 6, inciso a) del Reglamento de Fiscalización¹⁶.

La conducta infractora actualiza una falta sustantiva que presenta un daño directo y efectivo a los bienes jurídicos tutelados y al modelo de fiscalización, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por la omisión de presentar el informe de precampaña, se vulnera sustancialmente la certeza en el ejercicio del gasto y aplicación de los recursos, la transparencia en la rendición de cuentas y a la equidad en la contienda electoral, porque la omisión impidió que la autoridad desplegara sus atribuciones fiscalizadoras, restando eficacia a los alcances de la auditoría, con lo cual se afecta gravemente el sistema de fiscalización.

En efecto, en el artículo 40 de la Constitución se encuentra establecido el principio democrático, como principio de legitimidad del sistema, esto es, como el núcleo de comprensión de la propia Constitución y como directriz del ordenamiento en su conjunto.

Este principio se proyecta en su dimensión material (derechos humanos) y en su dimensión estructural (división de poderes, estructura y atribuciones de éstos y elección de órganos representativos y de gobierno), sin que ambas dimensiones puedan disociarse, dado que el principio democrático opera como principio de legitimación del Estado y del Derecho.

Por la naturaleza intrínseca que el Poder Constituyente concedió al principio democrático, su eficacia interpretativa irradia a todo el ordenamiento, pues dicho principio funge como núcleo armonizador de la unidad sistémica.

En el **sistema electoral mexicano**, las elecciones tienen como **eje rector la transparencia**, lo que supone el cumplimiento de diversos supuestos que hacen

¹⁶ "Artículo 79. 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes: a) Informes de precampaña: (...) I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como los gastos realizados; III. Los informes deberán presentarse a más tardar dentro de los diez días siguientes al de la conclusión de las precampañas; (...)." "Artículo 223. Responsables de la rendición de cuentas. (...) 6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición serán responsables de: a) Presentar su informe de gastos de precampaña o campaña al partido o coalición. (...)."

posible que el resultado de las votaciones sea claro reflejo de lo que los electores han decidido. La transparencia de los resultados no es consecuencia de un solo suceso, sino de una secuencia de actos que tendrán como resultado la generación de confianza en la sociedad, que abarca desde los actos de organización electoral hasta la rendición de cuentas por parte de los actores políticos, que informan a la ciudadanía, con la intermediación de la autoridad electoral, la manera como utilizan sus recursos para acceder a una candidatura y, eventualmente, al ejercicio de un cargo público.

Desde la perspectiva de la transparencia y la rendición de cuentas, la democracia debe entenderse como un sistema de gobierno en el que las acciones de los gobernantes son vigiladas por la ciudadanía. La transparencia, no sólo involucra a la autoridad electoral, sino también a los partidos y sus precandidatos y candidatos, a los aspirantes a una candidatura independiente y a los candidatos independientes, **quienes no sólo tienen obligaciones de transparencia legalmente trazadas, sino también la de responder a la ciudadanía de su actividad cotidiana y del modo en que utilizan los recursos con que cuentan durante el periodo de obtención de apoyo ciudadana, la precampaña y la campaña electoral.**

Es decir, en el sistema electoral, la transparencia tiene dos posibles efectos: visibilizar de forma clara el funcionamiento de los actores electorales – autoridades, partidos y candidatos- y, a su vez, generar información socialmente útil, que permite que la ciudadanía, en su calidad de electorado, conozca el origen, monto y destino de los recursos con que cuentan los partidos y candidatos, tanto para su operación ordinaria, como aquéllos que aplican para los procesos internos de selección, obtención de apoyo ciudadano o los destinados para sufragar los gastos de una campaña electoral.

Constitucionalmente se han fijado una serie de principios que rigen la materia electoral para promover la transparencia y la rendición de cuentas de los recursos utilizados en el ámbito electoral. De este modo, el artículo 41 de la Constitución Federal establece principios rectores que permiten el equilibrio del sistema, al favorecer la autenticidad de las elecciones, la igualdad de condiciones entre los contendientes, la transparencia en el uso de recursos y la operación de medios de control y vigilancia para el ejercicio del gasto, entre los que se encuentran los siguientes:

- **Equidad de medios materiales.** De acuerdo con este principio, la ley garantizará que los partidos cuenten con los elementos necesarios para llevar a cabo sus

actividades y señala las reglas a que se sujeta el financiamiento público y el que destinen a las campañas electorales.

- **Prevalencia del recurso público.** Acorde con este principio, la ley debe fijar las reglas del financiamiento de los partidos y de sus campañas, de modo que el financiamiento público tenga preeminencia sobre el privado.

- **Suficiencia de recursos para el cumplimiento de fines.** Conforme con este principio, el financiamiento público que reciban los partidos políticos en términos de ley, debe ser suficiente para el sostenimiento de sus actividades permanentes y aquellas que desplieguen para obtener el voto ciudadano.

- **Medidas de austeridad para el ejercicio del gasto.** Este principio se refiere a que los gastos que realicen quienes participan en una contienda electoral (en procesos internos de selección, periodos de obtención de apoyo ciudadano y de campañas electorales) deben ser racionales y sujeto al escrutinio público e institucional.

- **Medios efectivos de control y vigilancia.** Conforme a este principio, el sistema de fiscalización electoral cuenta con los mecanismos de control y vigilancia a que se someten los sujetos obligados a la comprobación del origen, uso y destino de sus recursos.

- **Potestad fiscalizadora del Consejo General del INE.** Acorde con este principio, el órgano máximo de dirección tiene la atribución de fiscalizar las finanzas de los partidos políticos y candidatos, así como de sus campañas, por lo que se puede valer de órganos técnicos para realizar esta función e instruir los procedimientos para la aplicación de las sanciones, trascendiendo, para ello, los secretos bancario, fiduciario y fiscal y contando con el apoyo de las autoridades federales y locales.

A partir de estos principios, legalmente se han establecido las reglas tendentes a garantizar la transparencia y publicidad de los recursos utilizados en el ámbito electoral, entre las que se encuentran:

- **Prohibición de aportaciones finalistas,** se refiere a que se proscribe que determinados sujetos realicen aportaciones, para evitar que sean entregadas a condición de que se cumpla con una tarea u objetivo ulterior.

- **Existencia de controles internos eficientes,** esto es, de mecanismos que den garantía de que las actividades políticas se realicen con equilibrios entre un gasto

razonable y un ingreso suficiente, y ambos sean fácilmente comprobables. Por lo que hay un órgano del sujeto obligado encargado de la administración de los recursos, que tendrá como parte de sus obligaciones presentar informes de ingresos y egresos; y,

- **Existencia de controles institucionales que garanticen la transparencia de los recursos y su debida comprobación**, se refiere a que, para la vigilancia del manejo de los recursos, existe una Comisión de Fiscalización, de carácter permanente, encargada de vigilar las finanzas de los sujetos obligados y de revisar los informes de gastos que presenten, con auxilio de un órgano técnico.

La conjugación de estos principios y reglas hace posible el funcionamiento del sistema de fiscalización, pues permite que la autoridad fiscalizadora cuente con atribuciones suficientes para llevar a cabo sus tareas de control y vigilancia; que los sujetos obligados [partidos políticos, precandidatas(os), candidatos(as), así como aspirantes a una candidatura independiente] **transparenten y rindan cuentas, y que la ciudadanía conozca, de primera mano, el modo en que dichos sujetos emplean los recursos con que cuentan, lo que al final no sólo genera un efecto informativo positivo, sino que permite que el electorado emita un voto libre y razonado**, derivado del cúmulo de información que recibe de modo previo a que acuda a las urnas y vote en favor de una opción determinada.

Reglas previstas para el procedimiento de fiscalización

El procedimiento de fiscalización constituye el conjunto sistematizado de actos mediante el cual el Instituto Nacional Electoral, a través de la Unidad Técnica de Fiscalización, la Comisión de Fiscalización y el Consejo General ejerce medios de control y vigilancia de los recursos de los sujetos obligados para garantizar que su origen, monto y destino se apega a la licitud y a la legalidad.

Por medio de la fiscalización, la autoridad fiscalizadora pone en funcionamiento los controles institucionales que garantizan la transparencia de los recursos y su debida comprobación.

Este procedimiento se desahoga en varias etapas. Para el caso en estudio cabe destacar la presentación de los informes.

De acuerdo con el artículo 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales el procedimiento para la presentación y revisión de los

informes se sujetará a las reglas establecidas en la Ley General de Partidos Políticos.

Una de esas reglas está relacionada con el deber de generar y conservar los documentos en los que se sustenta cada una de las operaciones de ingresos y egresos que realizan durante las precampañas, obtención de apoyo ciudadano y campañas electorales, con independencia de que, por regla, esos elementos de respaldo se tengan que registrar en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF).

De conformidad con el artículo 77, numeral 2 de la Ley General de Partidos Políticos, la revisión de los informes que los partidos políticos presenten sobre el origen y destino de sus recursos ordinarios y de campaña, según corresponda, así como la práctica de auditorías sobre el manejo de sus recursos y su situación contable y financiera estará a cargo del Consejo General del Instituto, a través de la Comisión de Fiscalización, la cual estará a cargo de la elaboración y presentación al Consejo General del Dictamen Consolidado y Proyecto de Resolución de los diversos informes que están obligados a presentar los partidos políticos.

En términos de lo estipulado en el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracciones I, II, III y V, de la Ley General de Partidos Políticos, los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña en los plazos establecidos para cada uno de los precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como los gastos realizados. El artículo 80 del mismo ordenamiento, establece las reglas a las que se sujetará el procedimiento para la presentación y revisión de los informes de los partidos políticos respecto de los informes de precampaña.

Naturaleza y objeto de los informes.

Los informes constituyen el acto jurídico que da inicio al procedimiento de auditoría, indispensable para concluir el procedimiento de fiscalización. La presentación de los informes por parte de los sujetos obligados [partidos políticos, aspirantes a candidaturas independientes, candidatos(as) independientes, precandidatas(os) y candidatas(os) de partidos políticos] **no solo tiene por objeto cumplir con los principios de transparencia, rendición de cuentas y certeza respecto de los recursos que se emplean, su finalidad también es garantizar el derecho a la información que le asiste a la ciudadanía para ejercer un voto libre e informado, así como dar continuidad a las subsiguientes etapas del procedimiento de fiscalización**, pues en dicho acto se concentra la información

contable que revisará la autoridad fiscalizadora, a efecto de verificar el cumplimiento de las obligaciones en la materia.

Bienes jurídicos tutelados a través de los procedimientos de fiscalización durante los procesos electorales.

Como se señaló, el procedimiento de fiscalización es el conjunto sistematizado de actos en los que participan los órganos del Instituto (principalmente la Unidad Técnica de Fiscalización, la Comisión de Fiscalización y el Consejo General); los sujetos obligados [partidos políticos, nacionales y locales, coaliciones, precandidatos(as), aspirantes a candidatos(as) independientes, candidatos(as)] y los sujetos indirectamente responsables (diversos proveedores de bienes y servicios con los que contratan los sujetos obligados).

Su finalidad es generar certeza y seguridad a la ciudadanía respecto del origen y aplicación de los recursos que ejercen los sujetos obligados para lograr de manera mediata o inmediata la renovación de los depositarios del poder público a nivel federal, local y municipal, así como permitir a la autoridad fiscalizadora dilucidar si en la contienda electoral se observaron los principios de equidad en la aplicación de los recursos económicos por parte de los actores políticos y el de la licitud en origen y aplicación de los recursos.

Acorde con lo previsto en los artículos 78, 79 y 80 de la Ley General de Partidos Políticos, se pueden distinguir dos tipos de procedimientos en materia de fiscalización, a saber:

- El procedimiento que tiene por objeto verificar el origen y aplicación de los recursos que ejercen los partidos políticos de manera anual respecto del financiamiento para actividades ordinarias y específicas.
- El procedimiento que tiene por finalidad revisar los ingresos y egresos de los sujetos obligados en el contexto de las diversas etapas del Proceso Electoral.

La fiscalización de los recursos aplicados por los sujetos obligados al llevar a cabo los actos vinculados con las precampañas, etapa de obtención de apoyo el ciudadano y campañas electorales (B) **tiene por objeto que se verifiquen en tiempo real, de manera integral y consolidada, los ingresos, públicos y privados, así como los gastos que ejercen los sujetos obligados durante los respectivos comicios electorales. Lo anterior, a efecto de lograr una revisión eficaz, oportuna y útil, que contribuya a tutelar los principios de transparencia y rendición de cuentas** y, en particular en el caso de la revisión de los ingresos y

gastos ejercidos durante **precampaña**, obtención de apoyo ciudadano y campañas, con la sustanciación y resolución de tales procedimientos se pretende hacer vigente el principio de equidad e igualdad en los procesos electorales, al tiempo de dar funcionalidad al sistema de nulidades de las elecciones previsto en el artículo 41, párrafo segundo, Base VI, de la Constitución federal, dado a que a partir de la reforma político electoral de 2014 se establece como causa constitucional que impide el reconocer la validez a determinada elección, el rebase del límite del gasto de campaña en un 5% del monto autorizado, cuando ello se acredite de manera objetiva, material y sea determinante.

Obligaciones de las y los aspirantes, precandidatos y candidatos en materia de fiscalización.

Los mecanismos de fiscalización avalan la legitimidad del proceso democrático representativo, ya que a través de estos se asegura que los contendientes actúen conforme a reglas preestablecidas, con medios económicos que garantizarán la **equidad de la contienda**.

Asimismo, garantizan la libertad de sufragio y de los derechos político-electorales, al momento que evitan que los partidos y las personas que aspiren a un cargo de elección popular cedan ante presiones o intereses particulares que pongan en riesgo la voluntad del elector, haciendo de una oferta política una máscara de actos ilegales o de intereses particulares ajenos a la contienda electoral.

La fiscalización, como medio institucional, verifica que los recursos utilizados tengan un origen lícito, que esos recursos sean utilizados sólo para solventar actividades que reflejen un fin electoral o partidista, y da certeza respecto a que todos los contendientes que buscan acceder a un cargo de elección popular tengan las condiciones mínimas necesarias para competir en circunstancias igualmente ventajosas, sin que exista la posibilidad de que alguno de ellos tenga un capital político superior sustentado en la ilicitud.

Por esta razón, de acuerdo con la normativa electoral federal, las y los aspirantes a una candidatura independiente, los partidos políticos, sus precandidatos/as y candidatos/as, así como las y los candidatos por la vía independiente, tienen el deber de presentar los respectivos informes (de ejercicio ordinario, de apoyo ciudadano, de precampaña y campaña) en los cuales rindan cuentas de manera clara y transparente de los ingresos obtenidos y egresos realizados, con la finalidad de que la autoridad esté en aptitud de revisar que los ingresos y egresos reportados efectivamente se apegan a la ley y a lo informado.

La presentación de dichos informes tiene por objeto cumplir con los principios de transparencia, rendición de cuentas y certeza respecto de los recursos que rigen los sistemas democráticos, así como garantizar el derecho a la información que le asiste a la ciudadanía para ejercer un voto libre e informado.

Las reglas y procedimientos para la presentación y revisión de los informes que permiten la comprobación de los ingresos y egresos generados por quienes aspiran a obtener un cargo de elección popular, que debe ser fortalecida por reglas que hagan posible la eficacia comprobatoria de los ingresos y egreso derivados de su aspiración.

Consecuencia del incumplimiento de la obligación de presentar informes de ingresos y egresos por parte de los sujetos obligados

De conformidad con los artículos 380, inciso g), 430 y 431, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es obligación de los sujetos obligados presentar ante la autoridad los informes de ingresos y gastos. La legislación regula las consecuencias que derivan del incumplimiento de esta obligación.

Por cuanto hace a las y los aspirantes a una candidatura independiente, el artículo 378 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dispone que le será negado el registro al aspirante que no entregue, a la conclusión del periodo para recabar el apoyo ciudadano, dentro del plazo establecido el informe de ingresos y egresos. Asimismo, establece que las y los aspirantes que sin haber obtenido el registro a la candidatura independiente omitan entregar el referido informe serán sancionados en los términos de esa Ley.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 229, párrafo 3, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, si un precandidato (a) incumple la obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña dentro del plazo legalmente establecido y hubiera obtenido la mayoría de votos en el proceso de selección interna de su partido, no podrá ser registrada (a) legalmente como candidata (o), mientras que los precandidatos (as) que sin haber obtenido la postulación a la candidatura no entreguen el informe antes señalado serán sancionados en los términos de lo establecido por el Libro Octavo de la propia ley.

Finalmente, de acuerdo con los artículos 445, inciso d) y 446 inciso g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, la omisión

de presentar los informes que correspondan para obtener el apoyo ciudadano, gastos de precampaña o campaña.

Como se puede apreciar, son dos las consecuencias previstas en la normativa, para el incumplimiento de la obligación de presentar los informes. La primera está relacionada con el ejercicio del derecho al sufragio pasivo (derecho a ser votado) y la segunda con la infracción por la conducta omisiva, que atenta contra los principios y bienes jurídicos tutelados en el procedimiento de fiscalización.

A partir de la interpretación gramatical, sistemática y funcional de lo previsto en los artículos 35, fracciones I y II; 41, párrafo segundo, Bases I, II, III y IV, y 116, fracciones I, segundo párrafo, y IV, incisos j), y k), en relación con el 36, fracción III; 39; 40; 54; 56; 115, primer párrafo, Bases I y VIII; 122, apartado A, Bases II, III y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Sala Superior ha estimado válidas y razonables las disposiciones legales que prevén dichas consecuencias. Parte de la base de que el derecho político electoral de voto pasivo no es absoluto, por lo que está sujeto a diversos límites y restricciones establecidos en la propia Norma Fundamental o en las leyes generales de la materia.

Bajo esas premisas, el citado órgano jurisdiccional ha estimado válido y razonable que las personas interesadas en ocupar un cargo de elección popular observen, entre otras normas, las que regulan las obligaciones en materia de fiscalización de los ingresos y gastos, **porque de esta manera se hacen vigentes y efectivos los principios rectores de las elecciones, entre otros, la certeza, seguridad jurídica, transparencia y equidad en el origen y aplicación de los recursos económicos** y, en consecuencia, ha considerado que lo previsto en los artículos 380, inciso g), 430 y 431, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye un requisito razonable y necesario para obtener el registro como candidato(a) a un cargo de elección popular (federal o local) el que se presenten, en tiempo y forma, ante la autoridad administrativa electoral nacional, los respectivos informes de ingresos y gastos ejercidos durante las precampañas o en la etapa de obtención de apoyo ciudadano, respectivamente, los cuales además deben permitir a la autoridad electoral y a la ciudadanía en general dilucidar con certeza la aplicación de esos recursos, así como determinar si se observaron los límites de gastos en esas etapas de la elección.

Conforme con lo hasta aquí expuesto, es claro que las faltas sustanciales acreditadas trastocaron los valores, principios y reglas del modelo de fiscalización, porque la omisión de presentar el informe de precampaña, a pesar de que la precandidata fue requerida para ello, como resultado de los hallazgos encontrados

por la autoridad fiscalizadora, impidió garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los recursos, con lo cual se vulneró la certeza en el ejercicio del gasto y aplicación de recursos, la transparencia y rendición de cuentas, porque impidió que la autoridad fiscalizadora contara con los elementos necesarios para desplegar de manera completa sus facultades de fiscalización y también impidió la generación de información socialmente útil, que permita que la ciudadanía, en su calidad de electorado, conozca el origen, monto y destino de los recursos utilizados en la precampaña.

En este tenor de ideas, esta autoridad reitera que aun cuando el régimen relativo a la presentación de informes de precampaña para los diversos cargos de elección popular establece obligaciones diferenciadas para los precandidatos y partidos políticos (a los partidos políticos como sujetos obligados directos en materia de fiscalización y a las y los precandidatos como sujetos obligados solidarios) lo cierto es que la responsabilidad es correlativa con las obligaciones específicas a que cada sujeto se encuentra constreñido, tan es así, que la propia legislación estipula una consecuencia jurídica directa para la o el precandidato, cuando incumple con sus obligaciones, así como las sanciones que ambos pueden soportar por realizar conductas infractoras.

Conforme con lo anterior, es claro que la conducta infractora trasgrede valores, principio y reglas de gran relevancia en el sistema electoral, porque la omisión en la presentación de los informes trastoca directamente el sistema de fiscalización y, por ende, los principio, reglas y controles establecidos para la concreción del principio democrático.

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues las mismas faltas que generan un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad es el de garantizar la certeza y transparencia en la rendición de cuentas con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines, mismo que fue infringido por la conducta señalada de la precandidata infractora.

En ese sentido, en el presente caso la conducta acreditada imputable al sujeto obligado se traduce en una **falta** de resultado que ocasionan un daño directo y real de los bienes jurídicos tutelados, arriba señalados.

Por tanto, al realizar una valoración en conjunto de este elemento con los demás aspectos que se analizan en este apartado, se agrava el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los precandidatos.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió una irregularidad que se traducen en una misma conducta y, por tanto, en una misma falta de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, que vulneran el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (reincidencia).

Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta materia de estudio.

Calificación de la falta

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que la infracción debe calificarse como **GRAVE ESPECIAL**.

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las

agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por la precandidata, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ESPECIAL**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió presentar el informe de precampaña respectivo, conducta desplegada con dolo directo.
- Que respecto a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar** de la conducta objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A) *CALIFICACIÓN DE LA FALTA*, del presente considerando en el cual se expuso el incumplimiento de la obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de revisión.
- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.
- Que se acreditó la falta de voluntad o disponibilidad del ciudadano Osvaldo Sandoval Quezada para presentar ante esta autoridad el informe de precampaña dentro del plazo correspondiente.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, así como los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos en el artículo 456, numeral 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, valorando las circunstancias del caso con base en la perspectiva de derechos humanos y la finalidad punitiva de dicha sanción.

Los supuestos normativos previstos en el artículo citado se detallan a continuación:

“(…)

I. Con amonestación pública;

II. Con multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, y

III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido político no podrá registrarlo como candidato.

“(…)”

Dado que una de las sanciones precisadas - *la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato*- ya no cobra relevancia toda vez que la jornada electoral ya pasó, previo a la determinación de la sanción a imponer al C. Osvaldo Sandoval Quezada, resulta necesario que esta autoridad realice un análisis de los bienes jurídicos afectados con la conducta desplegada para así valorar la sanción correcta a imponer en el caso en concreto.

En este sentido el artículo 229 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece la obligación sustancial para los partidos políticos y precandidatos de presentar los informes de precampaña respecto del origen y destino de los recursos que obtengan para el desarrollo de los procesos internos de selección de sus candidatos, de manera individual por cada uno de los precandidatos y para cada precandidatura, para lo cual, deberán de acompañar la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

La no presentación de los informes de precampaña vulnera la certeza y la transparencia en la rendición de cuentas, ya que impide que la autoridad fiscalice los recursos que fueron utilizados por los partidos políticos y precandidatos en la competencia interna para designación de sus candidatos a un cargo de elección popular. Así es necesario que los informes de ingresos y gastos de precampaña se presente en los plazos establecidos por la ley con el fin de que la autoridad pueda llevar a cabo sus funciones de fiscalización.

Esta función fiscalizadora se realiza mediante actividades preventivas, normativas, de vigilancia, de control operativo y, en última instancia, de investigación. Sus principales objetivos son los de asegurar: a) la transparencia y rendición de cuentas, como principios que permiten visibilizar de forma clara el funcionamiento de los actores electorales – autoridades, partidos, personas precandidatas y candidatas– y, a su vez, generar información socialmente útil, que permita que la ciudadanía, en su calidad de electorado, conozca el origen, monto y destino de los recursos con que cuentan los referidos sujetos, tanto para su operación ordinaria, como aquellos que aplican para los procesos internos de selección o los destinados para sufragar los gastos de una campaña electoral, y b) la equidad y legalidad en la actuación de los partidos políticos y demás sujetos obligados para la realización de sus fines. Por ello, el desarrollo cabal de la tarea de fiscalización no puede entenderse como una afrenta a los partidos políticos, sino como un ejercicio que legitima y fortalece la competencia democrática en el sistema de partidos¹⁷.

En el modelo actual de fiscalización los precandidatos son responsables solidarios y pueden ser sancionados por incumplir con las obligaciones o cargas que se les imponen –en este caso por la falta de presentación de los informes de precampaña– con independencia de la responsabilidad exigida a los partidos, a quienes también se les puede sancionar por incumplir con sus obligaciones.

Al respecto, como ya quedó precisado en los artículos 229 numeral 3 y la citada fracción III del artículo 456, numeral 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establecen que el Instituto Nacional Electoral, es la autoridad competente para determinar que ante la omisión de presentar el Informe de precampaña es dable sancionar a los precandidatos con la pérdida o cancelación del registro a ser candidato, esto es, a ser votado.

La anterior, previsión legal tienen como sustento que se lleve a cabo una adecuada fiscalización en materia electoral, lo cual permite procesos más competitivos y equitativos, e inhibe conductas que violentan la normatividad, así se acredita un interés general superior al de un solo ciudadano.

Sin embargo, en el caso que nos ocupa la jornada electoral ya feneció y quedó firme, por lo que la sanción consistente en la pérdida del derecho a ser registrado como candidato o bien, la cancelación de dicho registro, pierde sentido y no funciona como una medida que salvaguarde los bienes jurídicos tutelados.

¹⁷ Woldenberg, José (2002), La construcción de la democracia, Plaza y Janés, México, pág. 337.

Señalado lo anterior, es dable establecer que la prevista en la fracción I, consistente en una amonestación pública sería una sanción que no se corresponde con el grado de afectación de los bienes jurídicos tutelados, pues ésta implica hacer un llamado o advertencia al ciudadano infractor, a fin de que enmiende su conducta.

Ahora bien, a fin de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor. El artículo 223 bis, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades financieras, bancarias y fiscales, al respecto la misma fue determinada en el apartado de **capacidad económica** los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el ciudadano no cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción I del artículo 456, numeral 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una **amonestación pública**, es la procedente para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que la participante de la comisión, en este caso la precandidata se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras, atendiendo a las circunstancias previamente analizadas.

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al C. Osvaldo Sandoval Quezada, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso c), fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una **Amonestación pública**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

3.5 Estudio relativo a la omisión de reporte de gastos.

A. Marco normativo

La hipótesis jurídica en estudio se compone por los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra disponen:

Ley General de Partidos Políticos

"Artículo 79.

1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes:

a) Informes de precampaña:

I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como los gastos realizados;

(...)"

Reglamento de Fiscalización

"Artículo 127.

Documentación de los egresos

1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.

2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.

3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto

registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento."

(...)"

De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de precampaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

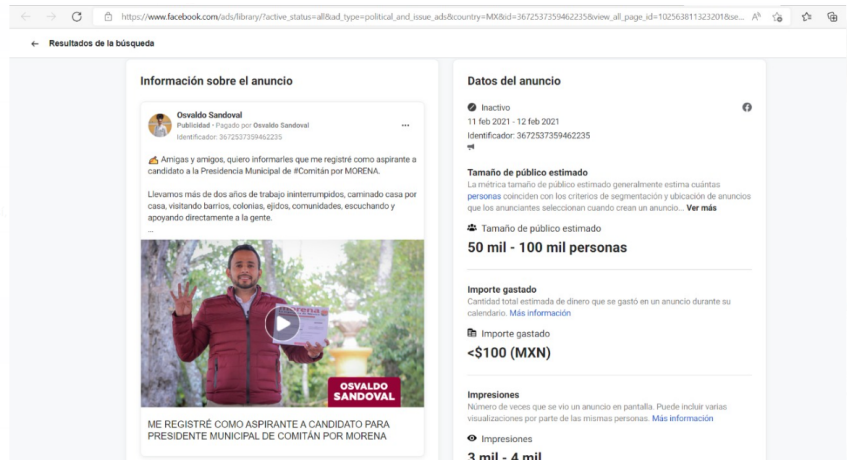
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.

Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

B. Caso particular.

Por cuanto hace a la publicación que constituyó un acto de precampaña por parte de los sujetos incoados, misma que debió ser reportada en el informe de precampaña aludido, cabe precisar que se tiene certeza de que dicha publicación se trata de una publicación pagada en la red social Facebook.

CONSEJO GENERAL INE/Q-COF-UTF/163/2021/CHIS



Asimismo, el video contenido en la publicación de mérito cuenta con edición que tuvo que ser contratada y pagada por los sujetos denunciados, y por ende dicho gasto también debió ser reportado.

Por lo anteriormente expuesto, este Consejo General considera que se advierten elementos para acreditar la existencia de una conducta infractora por parte de los sujetos obligados, por cuanto hace al video y publicación analizados en el presente apartado, por lo que se concluye que vulneraron lo previsto en el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización. En consecuencia, este Consejo General concluye que ha lugar a determinar **fundado** el procedimiento administrativo sancionador en cuanto al presente apartado.

C. Determinación del monto.

Para efectos de cuantificar el costo de los gastos no reportados por el sujeto obligado, de la respuesta de la Dirección de Auditoría en donde informó que se utilizó la metodología en términos del artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, como se describe a continuación:

- Se consideró información relacionada en los registros contables presentados a través del SIF por los sujetos obligados

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/163/2021/CHIS

- En los registros contables de los sujetos obligados se buscaron aquellos con características similares identificando los atributos, con el fin de ser comparables.
- De los registros similares, se procedió a identificar el valor más alto, con el fin de calcular el costo de la propaganda o gastos no reportados por el sujeto obligado
- En los casos en los cuales no se contaba con registro similar en el SIF, se procedió a recabar información reportada por los proveedores en el RNP.

Una vez obtenido el costo por el gasto no reportado, se determinó el valor de la forma siguiente:

ID Matriz	Estado	Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Valor unitario con IVA	Costo total
2486	Michoacán	Edición y Video de Spots Publicitarios	Servicio	1	\$7,200.00	\$7,200.00

Asimismo, de la respuesta brindada por la empresa Meta Platforms, Inc, se tiene certeza de que el costo del video pautaado en la red social Facebook ascendió a un monto de \$80.00 (ochenta pesos 00/100 M.N.).

Una vez identificado el concepto más semejante y obtenido el costo unitario, se determinó el importe total por los gastos reportados de la forma siguiente:

Concepto	Costo unitario (A)	Cantidad (B)	Total (A*B)= (C)
Edición de video	\$7,200.00	1	\$7,200.00
Video pautaado en Facebook	\$80.00	1	\$80.00
Monto involucrado			\$7,280.00

En consecuencia, derivado de las circunstancias particulares que rodearon los hechos que se investigan, de manera específica el monto no reportado por el otrora precandidato denunciado por los conceptos señalados de precampaña es de **\$7,280.00 (siete mil doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.)**, es que esta autoridad concluye que resulta razonable y objetivo considerar dicho monto como el involucrado para la determinación de la sanción que corresponde.

Lo anterior tiene como finalidad salvaguardar los principios de prevención general y prevención específica, de tal manera que la sanción impuesta sea una consecuencia suficiente para que en lo futuro no se cometan nuevas y menos las mismas violaciones a la ley, preservando en todo momento el principio de proporcionalidad en la imposición de sanciones y el respeto a la prohibición de excesos.

Así, considerando los parámetros objetivos y razonables del caso concreto, se justifica el quantum de la sanción a imponer.

D. Determinación de la responsabilidad de los sujetos incoados.

Que una vez que ha quedado acreditada la comisión de la conducta ilícita, de conformidad en los artículos 79, numeral 1, inciso a) fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, que ya han sido analizados en la parte conducente de esta Resolución, se procede a individualizar la sanción correspondiente, atento a las particularidades que en el caso se presentan.

En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por cuanto hace a la omisión de reportar los egresos derivados de la elaboración y edición de un video, así como el costo por su publicación en la red social Facebook, que no fueron localizados en la contabilidad de los sujetos denunciados, es decir del C. Osvaldo Sandoval Quezada y del partido político Morena.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea de resolver de manera expedita, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los

sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”

Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes a su operación Ordinaria – Trimestral, Anual-, de Precampaña y Campaña.

Ahora bien, por lo que hace a los precandidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que *“Los candidatos y precandidatos son responsables solidarios del cumplimiento de los informes de campaña y precampaña. Para tales efectos, se analizará de manera separada las infracciones en que incurran.”*

De lo anterior se desprende que, no obstante que los sujetos obligados hayan incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del precandidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el precandidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que respecto a las precampañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los precandidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda interna.
- Que los precandidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de precampaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello; consecuentemente, los precandidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los precandidatos, partidos o coaliciones, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el precandidato está obligado a presentar el informe de ingresos y egresos ante el partido y éste a su vez ante la autoridad electoral) según sea el caso de que se trate.

Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los precandidatos, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de precampaña, ante las responsabilidades compartidas entre partido o coalición y precandidato, a determinar al sujeto responsable, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.

Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que, en materia de presentación de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y precandidatos, a continuación, se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

De conformidad lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los precandidatos obligados solidarios.

El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de cada uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente

de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado.

Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7, inciso c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de precampaña y de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y es en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los precandidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador.

Es así que, de actualizarse dicho supuesto, se aplicaría la responsabilidad solidaria para el precandidato. En este contexto y bajo la premisa que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los precandidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de precampaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los precandidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les corresponde.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación **SUP-RAP-153/2016** y su acumulado al determinar lo siguiente:

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.

Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.

Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.

De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad

competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos. Tercera Época: Recurso de apelación. SUPRAP018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.”

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Si bien es cierto, fue el otrora precandidato quien realizó la publicación del video pautado en la red social Facebook en su propio perfil, también lo es que el partido político Morena, quien, como ya ha sido señalado, es garante del actuar de sus precandidatos, y no realizó el deslinde alguno al respecto. De igual manera, tampoco realizó el desline por la edición de dicho video.

Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta de los sujetos obligados no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al partido Morena, de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditaron ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de la conducta infractora tanto por la omisión de reportar egresos, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 - 2021, pues no presentaron

acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las cuales son originalmente responsables.

Señalado lo anterior a continuación se individualizará la sanción correspondiente.

E. Individualización de la sanción.

Ahora bien, toda vez que en el **Apartado B** se ha analizado una conducta que violenta los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; y 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar la falta determinando lo siguiente:

- a) Tipo de infracción (acción u omisión).
- b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
- c) Comisión intencional o culposa de la falta.
- d) La trascendencia de las normas transgredidas.
- e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el **apartado de “capacidad económica”** de la presente resolución.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los elementos para calificar la falta (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción (**inciso B**).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).

Con relación a la irregularidad identificada en el procedimiento de mérito, por no reportar la contratación por la edición de un video publicitario, así como por la pauta dentro de la red social Facebook, la falta corresponde a una **omisión**¹⁸, atentando a lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; y 127 del Reglamento de Fiscalización.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

Modo: El sujeto obligado con su actuar dio lugar a la conducta analizada en el presente procedimiento, misma que vulnera los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; y 127 del Reglamento de Fiscalización, a saber:

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió durante la sustanciación del procedimiento de mérito, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Chiapas.

Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Chiapas.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por omitir reportar gastos realizados por concepto de (la

¹⁸ Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003

elaboración y edición de un video), se vulneran la certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los recursos.

Así las cosas, la falta sustancial de mérito traen consigo la no rendición de cuentas, impiden garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los valores antes establecidos y afectó a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).

En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que la fiscalización de los recursos de los sujetos obligados, además de tutelar bienes jurídicos tales como la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, busca garantizar el cumplimiento estricto de las normas relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la normatividad adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la competencia electoral.

Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados.

Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que, cuando de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente¹⁹:

- Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y beneficio.
- Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales.
- Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado.

¹⁹ Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SX-RAP-4/2016.

- La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios que ofrecen; cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o servicios valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.
- Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.

Ahora bien, en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, cotizaciones con proveedores o, en su caso, cámaras o asociaciones del ramo que se trate. En un segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y comparable.

Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, valorará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada.

Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de Fiscalización, se debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización.

En ese tenor se considera que, para efectos de determinar el valor de un bien o servicio no reportado por el sujeto obligado, optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, no tendría un efecto disuasivo, puesto que esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación comprobatoria.

En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos²⁰; y 127 del Reglamento de Fiscalización²¹.

De los artículos señalados se desprende que, los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de precampaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los recursos, en tanto es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad

²⁰ "Artículo 79. 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes: a) Informes de precampaña: I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como los gastos realizados. (...)"

²¹ "Artículo 127. 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad; 3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento"

fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral.

Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los recursos.

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por las conductas señaladas, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los recursos erogados por el partido infractor, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.

En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto obligado se traduce en **una falta** de resultado que ocasionan un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que las infracciones en cuestión generan una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los entes obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta, pues el sujeto obligado cometió irregularidades que se traducen en una falta de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los recursos erogados por el partido infractor.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

Calificación de la falta.

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que las infracciones deben calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.

A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.²²

²² Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el apartado de **“capacidad económica”** de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en razón de que la conducta infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación electoral, aplicable en materia de fiscalización.
- Que respecto a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, de la conclusión objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A) **CALIFICACIÓN DE LA FALTA**, en el cual se expuso el incumplimiento de la obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de revisión.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.

- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de precampaña del proceso electoral correspondiente.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$7,280.00 (siete mil doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.)**.
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.²³

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al **150% (ciento cincuenta por ciento)** sobre el monto involucrado de la conclusión sancionatoria, a saber **\$7,280.00 (siete mil doscientos pesos 00/100 M.N.)**, lo que

²³ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/163/2021/CHIS

da como resultado total la cantidad de **\$10,920.00 (diez mil novecientos veinte pesos 00/100 M.N.)**.

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al partido **Morena**, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$10,920.00 (diez mil novecientos veinte pesos 00/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

3.6 Rebase del tope de gastos de precampaña.

Toda vez que de lo ya analizado en el Considerando **2.6** de la presente Resolución, se concluyó que el C. Osvaldo Sandoval Quezada, entonces precandidato a Presidente Municipal de Comitán de Domínguez por el partido político Morena, tuvo egresos no reportados por concepto de la edición y la pauta en la red social Facebook de un video, es conveniente sumar al tope de gastos de precampaña dichas aportaciones de acuerdo a la siguiente tabla:

Cargo	Precandidato	Total de gastos	Tope de gastos de precampaña	Monto susceptible de sumatoria	Total de gastos final	Diferencia al rebase
		(A)	(B)	(C)	(A)+(C)=(D)	(B)-(D)= (E)
Presidente Municipal	Osvaldo Sandoval Quezada	\$0.00	\$518,196.94	\$7,280.00	\$7,280.00	\$510,916.94

En conclusión, se desprende que por lo que hace al presunto rebase de tope de gastos de precampaña no se actualiza, toda vez que el C. Osvaldo Sandoval Quezada tiene un total de gastos final de \$7,200.00 (siete mil doscientos ochenta pesos 00/100 M.N), siendo que el tope de gastos de precampaña del entonces precandidato a Presidente Municipal de Comitán de Domínguez, fue de \$518,196.94 (quinientos dieciocho mil ciento noventa y seis pesos 94/100 M.N.), existiendo una

diferencia de \$510,916.94 (quinientos diez mil novecientos dieciséis pesos 94/100 M.N).

En razón de lo anterior, esta autoridad advierte que no existe un rebase al tope de gastos de la precampaña denunciada.

4. Vista al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado Chiapas. Tal y como fue expuesto en el apartado de antecedentes de la presente Resolución, de manera previa, se solicitó considerar al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, los hechos denunciados que podrían actualizar actos anticipados de precampaña. Lo anterior a fin de salvaguardar el derecho fundamental de acceso a la justicia.

Por lo que este Consejo General considera procedente requerir al **Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas**, informe la determinación que en su caso haya recaído a la causa hecha de su conocimiento, a fin de poder conocer la calificación de los hechos denunciados y así, esta autoridad esté en aptitud de emitir la determinación que conforme a derecho corresponda.

5. Notificación electrónica. Que con fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, en sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto **aprobó el Acuerdo INE/CG302/2020**, por el que determinó la **notificación electrónica** de las actuaciones relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización.

En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente:

1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado.

Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por la pandemia del COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas, rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de

certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo electrónico.

2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de notificación la realizada “vía electrónica”.

3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del conocimiento de las personas obligadas la determinación de la autoridad electoral.

En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo General aprueba que las notificaciones a las personas obligadas en materia de fiscalización sean realizadas de manera electrónica.

En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones se realicen a las personas obligadas de forma electrónica a través del Sistema Integral de Fiscalización, respecto de aquellas personas obligadas que cuenten con acceso al módulo de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017, para que en su caso, y por su conducto realice la notificación a los interesados de su instituto político.

En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley de Instituciones, se:

R E S U E L V E

PRIMERO. Se **sobresee** lo referente a las publicaciones que presuntamente fueron realizadas con anterioridad al inicio de la precampaña, por los argumentos vertidos en el Considerando **2** de la presente resolución.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/163/2021/CHIS

SEGUNDO. Se declara **fundado** el procedimiento administrativo sancionador electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de Morena y el C. Osvaldo Sandoval Quezada, otrora precandidato a Presidente Municipal de Comitán de Domínguez, en términos de lo expuesto en los Considerandos **3.3 y 3.5** de la presente Resolución.

TERCERO. Se impone al partido político **Morena**, una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de **\$155,459.08 (ciento cincuenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 08/100 M.N)**, de conformidad con lo señalado en el Considerando **3.4, Apartado A.**

CUARTO. Se sanciona al ciudadano **Osvaldo Sandoval Quezada**, con una **Amonestación pública**, de conformidad con las razones y fundamentos expuestos en el Considerando **3.4, Apartado B**, de la presente Resolución.

QUINTO. Se impone al partido político **Morena**, una reducción del **25%(veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de **\$10,920.00 (diez mil novecientos veinte pesos 00/100 M.N)**, de conformidad con lo señalado en el Considerando **3.5, Apartado E.**

SEXTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización proceda a actualizar los saldos finales de egresos en el anexo del Dictamen Consolidado que por esta vía se modifica. De conformidad con lo expuesto en el Considerando **3.6** de la presente Resolución.

SÉPTIMO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización, notifique a los partidos Movimiento Ciudadano, Morena y Nueva Alianza Chiapas respecto del procedimiento de cuenta a través del Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando **5** de la presente.

OCTAVO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización, notifique de manera personal la presente resolución al C. Osvaldo Sandoval Quezada.

NOVENO. Se ordena dar vista al Instituto de Elecciones y de Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, de conformidad con lo señalado en el Considerando **4** de la presente Resolución.

DÉCIMO. Hágase del conocimiento del Instituto de Elecciones y de Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, a través de la Unidad Técnica de Vinculación, a efecto de que:

- Proceda a publicar en el Diario o Gaceta Oficial Local la amonestación pública impuesta al C. Osvaldo Sandoval Quezada, otrora precandidato a Presidente Municipal de Comitán de Domínguez, en el estado de Chiapas, la cual se hará efectiva a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme.
- La sanción determinada sea pagada en dicho Organismo Público Local Electoral, la cual en términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se hará efectiva a partir del mes siguiente a aquél en el que la presente Resolución haya causado estado; y los recursos obtenidos de la sanción económica impuesta en la presente Resolución, serán destinados al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los términos de las disposiciones aplicables.

DÉCIMO PRIMERO. En términos de lo dispuesto en los artículos 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el recurso que procede en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

DÉCIMO SEGUNDO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 29 de noviembre de 2022, por votación unánime de las y los Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/163/2021/CHIS

Se aprobó en lo particular por lo que hace a la reducción de las ministraciones mensuales producto de la sanción, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por nueve votos a favor de las y los Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en contra de la Consejera y el Consejero Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña y Maestro José Martín Fernando Faz Mora.

Se aprobó en lo particular por lo que hace a la matriz de precios, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por ocho votos a favor de las y los Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y tres votos en contra de las Consejeras y el Consejero Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Carla Astrid Humphrey Jordán y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.

Se aprobó en lo particular por lo que hace no considerar dar vista a la Secretaría Ejecutiva, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por nueve votos a favor de las y los Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en contra de la Consejera y el Consejero Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.

Se aprobó en lo particular por lo que hace al estudio de la capacidad económica de las personas, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por nueve votos a favor de las y los Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en contra de la Consejera y el Consejero Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/163/2021/CHIS

Se aprobó en lo particular por lo que hace al criterio de sobreseimiento, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por diez votos a favor de las y los Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y un voto en contra del Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.

Se aprobó en lo particular por lo que hace al monto involucrado al no considerar aquella entidad federativa que cuente con ingreso per cápita semejante, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por nueve votos a favor de las y los Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en contra de la Consejera y el Consejero Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.

**EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL**

**EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL**

**DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO**

**LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA**